

Ignacio Ellacuría ¿Solución política o solución militar para El Salvador?

RESUMEN

El artículo presenta y discute el tema candente de cuál es la solución más adecuada para resolver el actual conflicto salvadoreño. El autor pretende contribuir a la discusión desde un punto de vista teórico.

En una primera parte formula algunas reflexiones metodológicas con las que trata de poner en claro cuál es el modo teórico de acceso al problema. Pretende conseguir con ello una adecuada disposición de ánimo en el lector, sobre todo en el lector involucrado de hecho en el problema nacional.

En la segunda parte analiza ocho hechos fundamentales en los que radica el problema y en la que se apunta ya el principio de solución. Los hechos se formulan primero en forma de tesis, para luego desarrollarlos en forma analítica y sistemática.

En la tercera parte se presentan las conclusiones y se elige como más realista y más racional, la solución político-militar. Se explica la estructura de esta salida al problema y algunos de los elementos que confronta o que rechaza.

El artículo, por sus múltiples divisiones y resúmenes, se vuelve de interesante lectura. El marco teórico y la extensión en el análisis permiten concretar el conjunto de problemas y el conjunto de posibles soluciones.

El Salvador tendría que estar ya en pleno proceso de reconstrucción para poder dar salida real a los ingentes problemas que le abruma. En vez de ello se encuentra en pleno proceso de destrucción, de descuartizamiento, que hace cada vez más difícil la viabilidad del país, sea quien fuere el vencedor de la

contienda. El conflicto es tan grave que no sólo afecta a la totalidad de la población salvadoreña sino que desestabiliza a toda la región centroamericana y pone en crisis múltiples relaciones internacionales. La destrucción y la angustia de la nación salvadoreña, la inestabilidad de la zona convertida en frontera de conflicto y la entera política internacional, traumatizada por la nueva

estrategia norteamericana, están exigiendo que se busque y se encuentre para El Salvador una sólida solución al tiempo que una solución inmediata.

¿De qué tipo ha de ser la solución? Esta es la primera pregunta que ha de hacerse, antes de ponerse a analizar y a estructurar los diversos pasos y/o elementos de esa solución. ¿Será una solución de tipo predominantemente militar, en la que el destino del pueblo se deje en manos de quien tenga mayor poderío militar? ¿Será una solución de tipo exclusivamente político, en la que por razonamientos y acuerdos se llegue a trazar —y a respetar— un camino de solución? ¿Se puede concebir en base a hechos reales otro tipo de solución?

Este es el problema al que quisiéramos buscar respuesta en el presente trabajo. Para ello lo articularemos en tres partes: una pequeña parte introductoria en la que se harán algunas advertencias metodológicas; una segunda parte en que se presentarán los hechos fundamentales que son, a la vez, causas del problema y condiciones de su solución; finalmente, una tercera parte en que se dirá algo sobre el carácter propio y específico de la solución requerida en El Salvador.

A. Aproximación metodológica al problema.

Es evidente desde un primer momento que el problema de la solución a la actual cuestión salvadoreña está sujeto a toda suerte de apasionamientos, pues no en vano ha sido y es para tantas personas cuestión literalmente de vida o muerte. No es una cuestión teórica ni una cuestión práctica lejana y sin importancia. En ella están inmersos poderosísimos intereses nacionales e internacionales y en ella se han invertido miles de vidas humanas; en ella han entrado en conflicto no sólo ideologías distintas y clases antagónicas sino centenares de miles de hombres de carne y hueso. Apenas habrá ya familia en El Salvador que no haya sido directamente afectada por el conflicto, ya sea por la pérdida violenta de alguno de sus miembros, amigos o conocidos, ya sea porque sus propiedades, su negocio, su estilo de vida se han visto sometidos a drásticos cambios.

Sería ingenuo pensar que este apasionamiento no nos afecta a todos. Y sería ingenuo pensar que es fácil despojarse de él, cuando se pretende tratar teóricamente el problema de una solución para El Salvador. Pero por lo mismo se hace pe-

rentoria una llamada al desapasionamiento que ponga en guardia contra las desviaciones de los intereses y de los prejuicios, pero sobre todo contra los odios y las revanchas violentas. Un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel y tortura o un tiro en la nuca. El análisis intelectual podrá favorecer más a una parte que a otra, pero difícilmente coincidirá plenamente con los juicios y, sobre todo, con las decisiones de ninguna de ellas. Un análisis intelectual debe ser tomado como lo que es: un aporte teórico a un problema práctico, un aporte que ilumine la solución y tal vez la impulse, pero que no la resuelva.

Una de las dificultades mayores para encontrar la solución adecuada al problema de El Salvador es que frente a él ya hay posiciones tomadas sea en razón de opciones conscientes, análisis teóricos o simplemente intereses inconscientes. Esto no sería malo, si esas posiciones tomadas estuvieran abiertas y no ya definitivamente cerradas. Puede ser hasta bueno que hayan posiciones tomadas, sobre todo cuando esa toma de posición surge de actitudes justas o simplemente razonables. Lo malo empieza cuando son posiciones cerradas, cuando son posiciones que no admiten discusión ni quedan abiertas a posibles cambios tras el reconocimiento de los errores propios o simplemente de la mayor justeza y justicia de los análisis ajenos.

Por eso estas líneas se ofrecen para ser discutidas y no para ser acusadas y condenadas tras un juicio sumarisimo. Se ofrecen para ayudar a encontrar una solución, que evidentemente no la tenemos en la práctica y probablemente tampoco en la teoría. No se trata, por tanto, de encontrar razones que justifiquen una posición tomada de antemano irracional o arracionalmente; se trata, más bien, de ir al encuentro racional de una solución que no se tiene todavía y que es urgente encontrarla para que el país no muera despedazado tras los espantosos estertores agónicos, que ya estamos escuchando noche a noche. Déjese de lado quién da las razones o a qué parte favorecen más y discútanse las razones mismas. Déjense de lado los prejuicios y los personalismos, porque lo que está en juego es demasiado serio como para convertirlo en tema de amor propio o de simple coherencia lógica. Al menos ésta es la actitud que se va a pretender alcanzar en estas líneas, que, por tanto, van a ser escritas con independencia crítica y con el interés prioritario puesto en la solución acertada para el país y no en el triunfo de una de

las partes en conflicto. No están escritas como portavoz de nadie ni están escritas para agradar. Están escritas para ser útiles.

Por lo mismo —y es la segunda observación metodológica— no se va a proceder a partir de principios universales más o menos dogmáticos, más o menos comprobados por la experiencia. Se va a proceder a partir de los hechos reales, que conforman la realidad salvadoreña para leer desde ellos los principios de solución.

No es que despreciemos los principios, sean estos revolucionarios o conservadores, sean de los llamados de derecho natural o de los mantenidos por la doctrina social de la Iglesia. Principios tales como “la violencia es mala, venga de donde venga”, “la violencia trae siempre mayores males de los que pretende evitar” o principios como “en determinadas circunstancias hay derecho a la insurrección y a la violencia”, “la violencia revolucionaria es siempre justa”, “sólo el pueblo en armas puede triunfar contra la explotación”, etc., son principios (?) que tienen su validez, entendida ésta de muy diversas formas, pero que como tales deben orientar la búsqueda y de ningún modo sustituirla como medio de inquisición autónomo, sometido más a la realidad de los hechos que a la presunta universalidad y obligatoriedad de los principios... Sin duda hay en el actual problema salvadoreño un fuerte componente ético que es una de las variables fundamentales tanto de su gravedad como de su urgencia; un componente ético, además, que es uno de los datos más reales y operativos sobre todo en el campo revolucionario. Desde este punto de vista, están en juego principios fundamentales de comportamiento tanto colectivo como individual. Pero esa eticidad, además de ser en nuestro caso una eticidad política, surge con mayor claridad y obligatoriedad desde los “hechos reales” orientados por principios que desde los principios mismos aplicados mecánicamente a unos hechos que no admiten esa aplicación mecánica.

Estamos en El Salvador ante una coyuntura bien precisa y lo que está en discusión es la salida más razonable y justa de esa coyuntura. Y en ningún lado está probado que la solución prevista como ideal en la formulación de los principios sea en cada caso la más razonable y justa, por una simple razón y es que tal vez no es solución, dadas las circunstancias y condiciones concretas.

Pero no por huir del principismo vamos a caer en el pragmatismo. El principismo parte de la idea de que sólo los hechos conformes a los

principios son hechos aceptables, mientras que el pragmatismo parte de la idea de que la posibilidad no tiene nada que ver con la normatividad y de que algo es siempre mejor que nada. El principismo tiende a ser intransigente, aunque suele ser más coherente y disciplinado. El pragmatismo tiende a ser acomodaticio y errático. Aquél tiende a ser más idealista en el sentido peyorativo del término, mientras que éste tiende a ser utilitarista, también en un sentido peyorativo. Frente a ellos hay que buscar dialécticamente una posición superior que es la del realismo, por difícil que sea definir el realismo y más difícil todavía ponerlo en práctica. Es la realidad —volveremos inmediatamente sobre el punto— que no es ni mero hecho ni mero principio quien debe determinar en última instancia tanto los principios como las conductas.

Y es que a la larga sólo una **solución verdadera** puede llegar a ser una **verdadera solución** —en esto tiene razón el principismo—. Pero a su vez una solución que no sea verdadera solución, nunca deberá juzgarse realistamente como la solución verdadera —en esto tiene razón el pragmatismo—. No estamos jugando con las palabras. Una verdadera solución es aquella que realmente resuelva el problema; en nuestro caso, la que resuelva en un primer momento la crisis de destrucción y, en un segundo momento, la tarea de construcción. Una solución verdadera es, a su vez, aquella que no sólo resuelve de hecho un problema sino que lo resuelve definitivamente porque realmente se acomoda a las raíces del problema y propone realistamente los remedios profundos adecuados, que son a la vez ajustados y justos. Así en el caso de El Salvador podría pensarse que con la matanza de doscientos mil revolucionarios se resolvía el problema actual sin tocar para nada las causas profundas de la necesidad de revolución. Esto nunca podría considerarse como una solución verdadera y por lo mismo no sería a la larga una verdadera solución, porque dejaría intocadas las raíces del mal. Pero tampoco sería una solución verdadera aquella que por su prolongación haría en el mejor de los casos insoluble el problema tanto por la complicación interna del mismo como por la presión internacional.

Pues bien, la conjunción de la verdadera solución con la solución verdadera debe hacerse partiendo de los “hechos reales” o, si se prefiere, de la realidad de los hechos. No vamos a hacer aquí disquisiciones epistemológicas. Solamente

queremos subrayar: a) que el punto de partida de una búsqueda de solución para El Salvador deben ser los hechos; b) que no todos los hechos tienen la misma significación ni validez o jerarquía sino que hay hechos más o menos reales; c) que sólo detectando la realidad de los hechos puede avanzarse hacia algo que sea a la vez solución verdadera y verdadera solución. Esta búsqueda de la realidad de los hechos es la que evade el principismo y el pragmatismo.

Por hechos se entiende aquí cualquier suceso verificable. Nos estamos refiriendo a hechos que afectan directa o indirectamente, mediata o inmediatamente al proceso histórico salvadoreño. Pero estos hechos no se dan aislados, ni son todos de la misma importancia; esto obliga a captar su unidad y a jerarquizar estructuralmente esa unidad. La captación de esa unidad y de la posición de cada uno de los hechos en la totalidad de la unidad es la captación de su realidad, de lo que realmente son y de lo que realmente significan.

Esto supone, por lo pronto, el acceso lo más amplio y estricto posible a todo lo que ocurre. Pero supone también un problema de selección y de cualificación de los hechos. Ahora bien, cualesquiera sean los principios o las opciones desde los que se seleccionan y cualifican los hechos, serán los hechos mismos quienes validen o invaliden esa selección y cualificación. Y esto de dos maneras: una, porque por su propio volumen se imponen a cualquier observador; otra, porque conducen o no a una solución. No se olvide que aquí nos estamos preguntando por aquellos hechos que definen la actual situación salvadoreña en vista a su solución. Hay también sin duda un momento de interpretación tanto de los hechos mismos como sobre todo de su proyección, el cual momento de interpretación puede depender de hipótesis sólo verificables en el futuro o de opciones cuya validez se funda más en una valoración ética. Pero aun en este último caso no es mal camino ir de lo mejor éticamente a lo verdadero lógicamente tanto por la intrínseca conexión del bien ético y de la verdad histórica como porque, en la actual situación de El Salvador, es evidente el mal que impera y la negación del mismo que se exige.

Todo ello debe hacerse tanto desde una historicización de los principios como de una universalización de los hechos reales. La historicización de los principios significa que se obliga al principio a ofrecer su significado concreto y real en el

modo como se realiza históricamente. La universalización del hecho real implica, en homología con el principio kantiano de no hacer nada que no pueda convertirse en norma universal, que se deslimite la concreción del hecho y se lo contraste con realidades más amplias en el espacio y más alejadas en el tiempo.

Inmediatamente veremos cómo todo esto se pone en marcha. Pero convenía explicitar de algún modo la aproximación metodológica al tema no para hacer discutibles disquisiciones sobre teoría social sino para mostrar al lector interesado en la realidad salvadoreña y al lector comprometido con ella, sobre todo si en sus manos está la posibilidad de contribuir a su solución, que lo que aquí se propone es la búsqueda teórica y práctica de algo que responda a la realidad salvadoreña. No se trata de despolitizar el tema y convertirlo en objeto de teoría social, pero sí se trata de dejar a un lado apasionamientos, utilitarismos, intereses egoístas y principismos para atinar lo más posible en la respuesta.

Esta respuesta vendrá dada por los hechos. Realmente se está dando ya por las distintas prácticas del gobierno, de la oposición y del resto de la sociedad salvadoreña. Pero esta respuesta no está resolviendo la crisis; al contrario, la está agudizando. Es cierto que esta agudización ha abierto nuevas perspectivas de solución; es cierto que la realidad de los hechos se está imponiendo y obligando a tomar nuevas posiciones, unas acertadas y otras desafortunadas, las cuales a su vez originan nuevas condiciones objetivas y subjetivas, que modifican el proceso. Pero como un hecho más debe verse la clarificación teórica del proceso y la discusión de su posible solución. Cada uno está obligado a contribuir con lo que puede a que se acorten los días de sangre y de muerte en El Salvador, a que pase cuanto antes este trance de angustia y este cáliz de amargura. Pero para que la muerte ya tan larga, ya tan extendida, ya tan cualificada se convierta en resurrección y vida. Tanta muerte no puede quedar guardada en las tumbas y en los mausoleos. Debe fructificar, debe dar paso a una nueva vida, a una nueva sociedad. Esto es lo que pretenden estas líneas y así deben, por consiguiente, ser leídas. Son páginas que pretenden contribuir modestamente a aclarar el camino que debe ser recorrido e incluso a trazar caminos que deben ser abiertos.



2. El planteamiento de la cuestión desde la realidad de los hechos.

Se trata, por lo tanto, de descubrir, describir e interpretar aquellos hechos reales, que pueden llamarse también fundamentales y que constituyen en su unidad los elementos determinantes de la situación actual, al menos en lo que tiene que ver con la pregunta titular del trabajo: ¿solución política o solución militar para El Salvador? Se trata de aquellos hechos, en los que, por su carácter fundamental respecto de esta pregunta, se dan cómo las premisas de la respuesta, las bases razonadas de la solución. Lo importante entonces en este punto es buscar los hechos fundamentales y darles su justo peso. Y la posición crítica consistiría en aportar otros hechos fundamentales no señalados aquí y en dar a los aquí apuntados otra interpretación o valoración distinta.

2.1 El primer hecho fundamental es el carácter de situación-límite en que se encuentra actualmente El Salvador.

Desde finales de 1976, con el fracaso del intento de reforma agraria promovido por el Coronel Molina, hay un progresivo endurecimiento de las acciones represivas y una acelerada polarización de las partes en conflicto. El régimen había comenzado ya a sentir no sólo la inaplazable ur-

gencia de las reformas sino el acelerado desarrollo de la organización popular. Se pensó entonces en que un golpe contra la oligarquía, como era el de una incipiente expropiación de tierras, podría iniciar un reformismo controlado que resolviese los problemas estructurales del país y que quitase base social a los movimientos populares. Es importante subrayar esta fecha por su paralelismo con la del 15 de octubre de 1979, en la que se intenta un proceso de reformas parecido, forzado por las mismas circunstancias y movido por semejantes razones. Ni lo sucedido en 1976 ni lo sucedido en 1979 puede explicarse simplistamente como si se tratara de una directa ingerencia norteamericana para impedir o prevenir un estallido revolucionario. Las interpretaciones maniqueístas de la historia pueden ser brillantes pero no son realmente explicativas.

La derrota del proyecto reformista de 1976 acelera y agrava el proceso de represión, al dar mano libre a las fuerzas de la oligarquía, que se habían visto seriamente amenazadas. La represión golpea en un primer momento a los sectores democráticos, que son burlados en las elecciones de 1977 y reprimidos hasta casi barrerlos de la escena política.

Pero todo viene de más atrás. Porque el dato básico de la situación-límite no es la represión sino que es la injusticia estructural y la violencia institucionalizada, que sobre la base de una ini-

cua distribución en la propiedad de los recursos ha creado una estructura económica, social, política y militar, que es la responsable última, la causa originaria de lo que actualmente está ocurriendo en El Salvador. No por sabido debe pasarse a la ligera sobre este dato fundamental. Apenas hay quien se atreva a negar la gravedad de la injusticia estructural que oprime a la mayoría del país y le obliga a una forma de vida intolerable por su inhumanidad. Lo que se niega es que de esta injusticia estructural, de esta violencia institucionalizada broten todos los demás males que afectan al país. Así, la actual administración de los Estados Unidos quiere hacer ver que la polarización de la situación salvadoreña se debe al influjo de la Unión Soviética y del comunismo internacional; muchos de los actuales gobernantes y, ya no digamos, la oligarquía sostienen que los males del país se deben a la prédica incendiaria de malos cristianos, que habrían trabajado más en favor de la lucha y del odio de clases que en favor del espíritu cristiano y del amor.

Como consecuencia de este dato básico surge dialécticamente una fuerte oposición política y militar, cuyo fundamento objetivo es la injusticia estructural y cuyo fundamento subjetivo es un ideal y una organización política, que contradice no sólo a las causas fundamentales de la situación actual sino también al esquema político-militar que lo sustenta. En El Salvador es claro que ha sido la clase dominante la que ha creado dialécticamente su clase opuesta y que ha sido la lucha de clases desatada por la primera la que ha puesto en marcha la lucha de clases de la segunda. Esto no obsta para que hayan intervenido determinados grupos y determinados individuos para purificar y robustecer una estricta conciencia de clase. Y no obsta tampoco para que a su vez la clase explotada y sus acciones hayan radicalizado las acciones de la clase explotadora. Una vez suscitada la relación dialéctica las dos partes se alimentan mutuamente tanto de la realidad estructural que las sustenta como de las acciones de sus contrarios. Tenemos, pues, que en El Salvador no sólo se da una injusticia estructural



ral intolerable sino también una lucha violenta entre quienes defienden en lo fundamental el *status quo* y quienes están contra él. Pero la oposición ya no es sólo ideológica ni siquiera económica, de quién va a acabar siendo el poder económico, sino que es política y militar de quién va a acabar siendo el poder político y el poder militar. De ahí que no baste con reformas estructurales sino que se necesite plantear quién va a defender últimamente esas reformas estructurales, esto es, quién va a tener el poder político y militar. Porque hasta ahora el poder político y militar, sobre todo éste, después de las sucesivas correcciones del esquema militar del 15 de octubre, están más cerca de la clase opresora que de la clase explotada, al menos de la clase explotada organizada.

Un tercer dato de la situación-límite, que es el más llamativo interna e internacionalmente es el de una bárbara represión, acelerada y agravada desde enero de 1980 tras la constitución de la segunda Junta cívico-militar con la entrada en ella del Partido Demócrata Cristiano, que no había podido introducir a ninguno de sus miembros en la primera. Las víctimas son literalmente incontables y desde luego superan un promedio de mil asesinatos al mes, excluidos los muertos, más bien pocos, caídos en acciones estrictamente militares. Esta represión tiene un conjunto de rasgos que la hacen ser excepcional: es en relación con la población salvadoreña —menos de cinco millones de habitantes— una represión masiva por su número; es una represión extremadamente sangrienta y salvaje, pues no sólo se mata sino que se tortura y se cometen contra las víctimas acciones crueles y sádicas; es una represión indiscriminada que busca aterrorizar y no respeta ni niños, ni ancianos, ni mujeres; es una represión que alcanza a los sectores más respetados del país, entre ellos Monseñor Romero y otros once sacerdotes, decenas de maestros y profesores universitarios, entre ellos el Rector de la Universidad de El Salvador, la casi entera dirigencia del FDR, apresada en medio de la ciudad cuando se sessionaba pacíficamente y que fue torturada y asesinada, así como miembros señalados del PDC; es una represión de la que en gran parte son responsables los cuerpos de seguridad, como lo han reconocido organismos internacionales y naciones amigas de la actual Junta de Gobierno. Monseñor Romero, por su parte, hablaba también de alguna represión por parte de la izquierda revolucionaria, pero reconocía que en número y en cualidad no admitía comparación con la per-

petrada o permitida y tolerada, según los casos, por los actuales detentadores del poder. Puede hablarse por tanto de una barbarización salvaje de la lucha, que es no sólo en sí misma detestable sino que está dejando secuelas gravísimas para el futuro del país.

Un cuarto dato es la existencia de una presión demográfica que para el año dos mil asegura la presencia de más de nueve millones de habitantes en una extensión menor de 22,000 kilómetros cuadrados. Si ahora la presión demográfica, causada por menos de cinco millones de habitantes, causa los problemas de toda índole que estamos sufriendo, puede sospecharse el agravamiento de estos problemas a lo largo de estos dieciocho años, de los cuales, si no se acaba con el conflicto pronto, la mayor parte se irá en restañar heridas sin posibilidades reales de un desarrollo suficiente.

Aunque más tarde completaremos el cuadro con datos que hacen referencia a la insostenibilidad de la situación, basta lo insinuado hasta ahora para poder calificar de situación-límite la actual situación salvadoreña. Es preciso partir de la extrema gravedad de esta situación para entender qué tipo de solución ha de darse al país. La situación-límite se está presentando en forma de conflicto social y de conflicto armado por su misma condición de situación-límite, porque es una situación desesperada que ha llevado en su desesperación objetiva y subjetiva hasta el límite y que, por tanto, está exigiendo una rápida y profunda solución, buscada por caminos diferentes de los seguidos hasta ahora.

En efecto, los caminos seguidos hasta ahora han llevado a una verdadera guerra civil (cfr. Ignacio Martín-Baró, "La guerra civil en El Salvador", ECA, enero-febrero, 1981, pp. 17-32). La guerra civil es de momento no la solución de la situación-límite sino su más clara manifestación. La situación ha llegado a tal límite de desesperación y conflictividad que se ha convertido en una guerra civil declarada, donde se enfrentan dos poderosas fuerzas militares. La guerra civil va más allá del puro enfrentamiento militar pues pone en pie de lucha a un gran sector de la sociedad salvadoreña frente a los intereses sustentados por la estructura actual del poder del Estado.

2.2. El segundo hecho fundamental es la anulación contumaz de toda solución política al problema estructural de El Salvador desde 1972 hasta hoy.

Estamos preguntándonos si hay una solución política para El Salvador. Respecto de esta pregunta se convierte en hecho fundamental la realidad de que en los últimos años no ha sido posible una solución política. La fecha de 1972 no es arbitraria porque en esa fecha, como le consta a la Democracia Cristiana, al Ingeniero Duarte y a los militares en el poder, se anuló la posibilidad de una solución política por el camino de las elecciones. Ya desde mucho antes se buscó siempre una solución amparada en la fuerza de las armas, en el ejército convertido en partido político, al que se le concedía sin discusión la atribución de nombrar el candidato oficial de la presidencia y seguro triunfador, dijeran lo que dijeran las urnas.

Ha habido, pues, una anulación contumaz de las salidas políticas a los problemas de El Salvador. Fue anulado el camino electoral en 1972 y en 1977. Fue anulado el camino de las reformas en 1973 y 1976. Fue anulado el golpe militar no violento y la coalición del Foro Popular del 15 de octubre de 1979. Fue anulado el proceso de organización y movilización de masas que iba cobrando una fuerza indudable desde 1975 a 1980. Fue anulado el proceso de sindicalización. Fue anulada la fuerza social de los partidos políticos. Y así con todo lo demás que tuviera que ver con la búsqueda de una salida política.

Esta violenta anulación de la solución política no es una mera anulación de hecho sino que responde a causas estructurales, que sobre-determinan las voluntades de los agentes y actores políticos. Han cambiado los militares en el poder, cambió en el 15 de octubre incluso el estilo de militares en el poder —la Juventud Militar— lo cual supuso una cierta ruptura con la línea anterior; han cambiado también las personas responsables de los intereses oligárquicos, pudiéndose hablar de la entrada en funcionamiento de una nueva generación más joven y preparada; han cambiado los estilos de la administración norteamericana... Y, sin embargo, han seguido las mismas prácticas contra todo lo que suponga oposición política, contra todo lo que suponga un peligro para el orden establecido.

Ni qué decir tiene que junto a esta anulación contumaz de soluciones políticas y soluciones de-

mocráticas se ha mantenido por parte de las estructuras de poder un discurso ideológico que ha hablado de democracia.

Se afirmaba de palabra lo que se negaba de hecho. No se ha aceptado realmente nunca cualquier crecimiento de nuevas fuerzas democráticas que pudieran poner en peligro la correlación de fuerzas existente en El Salvador desde 1932 hasta hoy. Creer que hoy, por la presencia en la Junta y aun en su presidencia de personas que no son militares y que no han sido defensores ciegos de los intereses oligárquicos, ha cambiado la correlación de fuerzas, es un error y un engaño. Todo el mundo sabe que el verdadero poder de la actual Junta no está en los civiles ni está en el apoyo de una gran masa de población organizada, sino que está en la cúpula militar de la Fuerza Armada y en la institución militar, apoyada de lleno por los Estados Unidos.

Todo ello nos lleva a concluir que, a pesar de las apariencias, sigue siendo cierta la tesis de que ha habido y hay una contumaz y eficaz anulación de cualquier solución política realmente democrática.

Podrá decirse que esta anulación de las soluciones políticas se ha dado también por parte de la oposición. La observación es objetiva en parte. Efectivamente, desde la constitución de las FPL hace once años y, poco más tarde, de los otros grupos armados, especialmente RN y ERP, se inicia en El Salvador un movimiento, no compartido en esas fechas por el PC, de que sólo a través de una revolución armada podría tener éxito la defensa primero, y el triunfo después, de los verdaderos intereses populares. Desde esas fechas se empieza a defender que no hay salida a través de los partidos políticos y de las elecciones, es decir, que no hay solución política puramente tal para los problemas de El Salvador. Esta convicción da paso a la creación y crecimiento de las organizaciones político-militares con un frente de masas para las acciones abiertas y un frente militar para las acciones violentas clandestinas. Más aún, en esta confluencia de lo político y de lo militar cobra mayor relieve el factor militar no sólo como arma de triunfo sino como garantía de la correcta conducción política. Puede hablarse así de una militarización del proceso y de las estructuras políticas por parte de la izquierda.

Sin embargo, ha de interpretarse correctamente esta otra anulación de las vías políticas. Sucede, en primer lugar, como respuesta a la

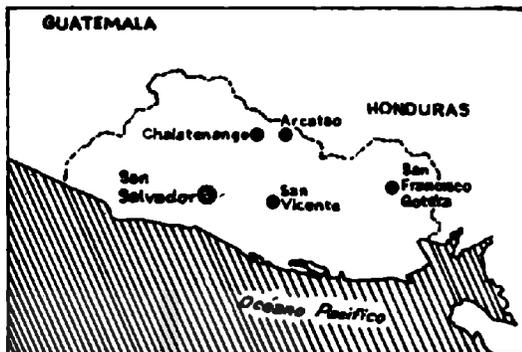
anulación previa por parte de los detentadores del poder. Y, en segundo lugar, ha de reconocerse que los hechos prueban que sus premisas eran correctas, por más que no necesariamente lo sean todas sus conclusiones; esas premisas, en efecto, suponían que no había salida puramente política, por más justa y razonable que fuera, para conseguir los cambios necesarios en el país: por el camino de los partidos políticos y por el camino de las elecciones siempre se iba a seguir estando a merced de lo que determinaran las fuerzas oligárquicas y el único partido político efectivo, que era y es la Fuerza Armada.

2.3. El tercer hecho es que las dos partes en conflicto se han decidido en favor de una solución con fuerte acento en lo militar.

No es sino una consecuencia del hecho anterior, pero es de por sí un hecho fundamental, que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar si la solución para El Salvador ha de ser política o militar.

Esta opción militar no es de ahora. Desde 1932 se ha encargado al poder militar que sea el garante no de la seguridad nacional sino de la distribución y disfrute del poder económico y del poder político en favor de las clases dominantes del país y del mantenimiento de unas estructuras e instituciones que garantizaran esa distribución y disfrute. Se trata de un hecho palmario reconocido como tal no sólo por los estudiosos de la realidad salvadoreña, no sólo por los hombres de la oposición, sino también por los propios militares que dieron el golpe del 15 de octubre y por el propio Ingeniero Duarte, que ha proclamado en repetidas ocasiones el contubernio a lo largo de cincuenta años de la Fuerza Armada con la oligarquía.

El capitalismo criollo, el capitalismo transnacional y los Estados Unidos coinciden en que sólo un fuerte poder militar puede garantizar la actual estructura del país y la presencia de un gobierno que les sea favorable. Hoy es claro, y así ha sido confesado por los dirigentes norteamericanos, que el mantenimiento de la actual Junta y del actual ordenamiento social sólo es posible en base a una sólida fuerza militar. Más aún, sólo es posible en base a una estricta guerra con clara intervención de militares y de recursos bélicos norteamericanos. Estados Unidos y, especialmente, la administración Reagan, están persuadidos que sólo una victoria militar, con la consiguiente



ZONAS CRITICAS. Un mapa de El Salvador con su capital San Salvador, muestra las poblaciones de Chalatenango, Arcatao, San Vicente y San Francisco Gotera, en las cuales se desarrollan operativos de contra-insurgencia.

derrota militar del FMLN, puede dar respuesta satisfactoria a los propios intereses norteamericanos y puede mantener en el poder a quienes ellos consideran seguros defensores de esos intereses.

También la parte contraria pone su esperanza en su propio poderío militar. Sabe que sin ese poder sus más justas demandas no tendrían eco alguno. Cree, según confesión de sus dirigentes, que cuenta con la suficiente fuerza militar para derrotar a su adversario, si éste no fuera ayudado descaradamente por el apoyo militar de los Estados Unidos. Cree asimismo que sus masas organizadas le reclaman el que potencie cada vez más su potencia militar. Y de hecho se ha lanzado a una plena actividad militar, que ha cobrado un nuevo carácter desde el inicio de la ofensiva general a principios de enero.

Hasta los partidos de clara vocación democrática y pacifista, como el MNR y el MPSC, en el que se ha refugiado la dirigencia demócrata cristiana disidente, aceptan que no es posible encontrar una solución adecuada para el país sin un respaldo militar. Esto no significa que crean en una solución puramente militar, pero la realidad les ha forzado a aceptar que no caben soluciones puramente políticas, por más razonables que éstas sean. Lo cual tiene mayor fuerza argumentativa, porque si las organizaciones político-militares han sido siempre partidarias de la lucha armada, no lo han sido los partidos políticos, que incesantemente han probado toda suerte de salidas no violentas a la situación del país.

2.4. El cuarto hecho es que, al menos, hasta ahora, la solución puramente militar no ha sido efectiva en favor de ninguna de las dos partes.

Es un hecho de fácil comprobación que la represión militar violenta, comenzada ya en el régimen militar de Molina, continuada por el régimen militar de Romero, prolongada durante la primera Junta cívico-militar y llevada a extremos inimaginables por la segunda Junta cívico-militar, no ha podido ahogar en sangre a la oposición, antes al contrario la ha fomentado y radicalizado. Las más de las 15,000 víctimas atribuibles directamente a la represión muestran, por lo pronto, o que hay miles de pertenecientes a las organizaciones político-militares que morirían en enfrentamientos o que, al menos, los cuerpos de seguridad han visto en esos miles, potenciales simpatizantes de la oposición, que han sido asesinados sin mediar provocación alguna. Como no ha cambiado la conducta de los cuerpos de seguridad y como siguen las altísimas cifras de víctimas de la represión, hay que concluir que el número de integrantes y simpatizantes no disminuye. Se ha llegado al extremo de considerar que quien no está a favor de ellos está contra ellos, que basta con ser joven, obrero o estudiante, para ser sospechoso de terrorismo y candidato seguro a la muerte.

Lo mismo puede decirse de la lucha estrictamente militar. Ni la Fuerza Armada, ni la Junta, ni el Departamento de Estado han podido probar alguna victoria militar importante contra el ejército regular guerrillero. Tras la ofensiva de enero, con todo a su favor: asesores norteamericanos que representan la décima parte de los oficiales salvadoreños, al frente de la estrategia, de la táctica y de la logística del ejército salvadoreño; millones de dólares en armamento y munición; estación seca que favorece las acciones militares ofensivas; cerco estricto al reabastecimiento externo de la guerrilla salvadoreña; posible desánimo de ésta tras la ofensiva de enero y, en cualquier caso, poca preparación para la nueva estrategia... no se ha podido lograr nada efectivo. Han sido decenas los fuertes operativos militares con el armamento más sofisticado, con miles de efectivos, con aviación y artillería, los que se han lanzado contra los distintos frentes guerrilleros. Comparando y confrontando los informes de una y otra parte y los relatos de informadores y periodistas internacionales, no puede afirmarse

que el poder militar de la izquierda ha sido hasta ahora quebrantado y, ni siquiera debilitado. Una y otra vez las fuerzas del gobierno han tenido que retroceder y abandonar lugares supuestamente conquistados para acudir a otros donde de nuevo han aparecido los mismos hombres y las mismas armas.

Ni siquiera el descarado y gigantesco intervencionismo militar norteamericano —si tenemos en cuenta las proporciones del territorio y de la población salvadoreña— ha podido cantar victoria. Su presencia creciente demuestra más bien que la Fuerza Armada salvadoreña estaba en grave peligro de ser derrotada por sus adversarios, a los que hace pocos meses no se les atribuía potencia militar suficiente para poner en peligro al bien formado ejército salvadoreño. Nunca se desacreditó tanto a la Fuerza Armada como con esta intervención de los norteamericanos. Cuando la guerra de las 100 horas el ejército salvadoreño pudo barrer de la frontera al ejército hondureño. Hoy no puede contra el ejército popular y ha tenido que recurrir al apoyo formal de una potencia extranjera.

Han pasado más de 16 meses de bárbara represión, casi sin precedentes en el mundo entero. Han transcurrido cuatro meses de constante ofensiva militar por parte de la Fuerza Armada, intervenida por el ejército de los Estados Unidos. Los resultados de momento son que la solución militar emprendida por ellos no les ha conducido a la victoria final. Tal vez piensen que ésta no tardará en llegar. Pero mucho tendrán que cambiar las cosas, porque de momento no se ha apreciado ningún debilitamiento en el conjunto del poderío militar de la izquierda.

Pero si la Fuerza Armada, constituida en elemento determinante de la estructura actual de poder, no ha conseguido, a pesar del apoyo directo y masivo de los Estados Unidos, ningún triunfo militar importante, tampoco el ejército popular con sus guerrillas y milicias lo ha obtenido.

Las acciones militares del diez de enero pasado mostraron la presencia de un verdadero ejército bien armado, que podía desplegarse de sus reductos del norte hasta las ciudades más importantes del país, pero no infligieron derrota alguna a las fuerzas regulares del ejército. No se logró entonces derrotar al ejército adversario y ni siquiera se le causaron bajas importantes. Probablemente tuvo mayores costos para los atacantes que para los defensores. Demostró, por lo

menos, que un triunfo rápido logrado en virtud de una ofensiva general no era de momento posible ni tampoco previsible en un corto espacio de tiempo.

Mucho más exitosa ha sido la etapa de resistencia activa, en la que pronto se transformó el inicio de la ofensiva general. La consolidación de las propias posiciones y el afianzamiento de los territorios propios ha sido notable, a pesar de los constantes y masivos ataques de sus enemigos. Incluso puede que el desgaste en hombres, en recursos y en moral causado al enemigo haya sido más importante de lo que dan a entender los comunicados oficiales de la Fuerza Armada. Pero, aun reconocido todo esto, no se ven hasta el momento signos evidentes de triunfo militar decisivo; no sólo no se han obtenido triunfos parciales ofensivos de importancia sino que no se prevén tales en los meses próximos.

El ejército popular, por tanto, o, más bien, el conjunto de fuerzas militares coordinadas en torno al FMLN, han mostrado un potencial bélico importante, incluso quizá nunca han estado tan fuertes y abastecidas como ahora. Pero esto no basta para asegurar la salida del conflicto a través de una solución puramente militar. Tal vez ni siquiera puede pensarse que las acciones militares podrían llegar a un desgaste y debilitamiento importante del adversario y tampoco a la animación de las masas organizadas hasta el punto de que éstas iniciaran una insurrección general.

Es claro que por parte y parte puede cambiar esta correlación de fuerzas. Pero lo que de momento parece más probable, al menos para un observador externo, es que se va a prolongar el enfrentamiento con enormes pérdidas en la población civil y en los recursos del país, sin que el FMLN pueda desplazar a la Junta de las ciudades y de la mayor parte del país y sin que la Fuerza Armada pueda desplazar al FMLN de las amplias zonas, en las que se mueve como en territorio propio.

2.5. El quinto hecho fundamental es la presencia de una presión internacional cada vez mayor, que fuerza a una rápida solución política.

El Salvador se ha convertido en un problema internacional, al haber hecho de él los Estados Unidos una de las fronteras del conflicto entre el Este y el Oeste, entre la URSS y USA. Ya desde los tiempos de Monseñor Romero se había

convertido en un problema internacional al estar horrorizados los pueblos democráticos por la trágica e increíble violación de los derechos y de las vidas humanas en un país que está a hora y media de vuelo de los Estados Unidos. El Salvador se ha convertido también en un grave problema interno para varios países democráticos y para instituciones internacionales como la Internacional Socialista y la Unión Demócrata-Cristiana, sobre todo para ésta, que ve, sin poderse explicar, cómo el PDC salvadoreño sigue presente en un gobierno que comete o permite cometer acciones tan salvajes.

El Salvador se ha convertido así en un problema mundial que urge ser resuelto. Hay necesidad y prisa por resolverlo, pues está impidiendo la resolución de otros más graves e importantes, pero no más urgentes.

Parecería que sólo los Estados Unidos urgen una solución de tipo militar. Con la obsesión interesada de que el FDR-FMLN no es más que la careta del poder soviético y cubano, y olvidando que con la URSS y con Cuba busca soluciones no armadas. USA está, por lo menos, tolerando la inhumana represión que se da en El Salvador y propiciando positivamente el aplastamiento militar del FMLN. Nadie es tan responsable como USA de la sangre que se está derramando en El Salvador, so pretexto de la seguridad nacional norteamericana y de los intereses políticos y económicos del hemisferio. Estados Unidos, bajo la administración Reagan, quiere demostrar que no va a permitir que los países del Tercer Mundo y, menos aún, los próximos a Estados Unidos, puedan buscar una solución política global, que no sea de corte capitalista.

Como quiera que sea, USA está a favor de una solución militar, porque sobre todas las cosas busca el aplastamiento militar del FMLN, por ver en él al impulsor y defensor máximo de una solución marxista-leninista para El Salvador. Y lo mismo busca para Guatemala, lo mismo para Honduras y, si pudiera, lo mismo para Nicaragua. Obsesionados los Estados Unidos, como insinué López Portillo con ocasión de la visita a México de Herrera Campins, con los esquemas de la guerra fría de los años cincuenta, superficialmente maquillados, quieren frenar militarmente el presunto expansionismo soviético, sin importarles mucho ni poco lo que son las causas reales de los movimientos revolucionarios. USA no aceptará solución política alguna que no implique como condición previa el aplas-

tamiento militar del poder militar revolucionario. No más Cubas, no más Vietnams, no más Nicaraguas.

Pero, incluso los Estados Unidos, no son insensibles a la razonabilidad de una solución política. De hecho la están proponiendo al hablar de unas futuras elecciones, que piensan no les serán desfavorables. Fuerza militar hoy, elecciones pacíficas mañana; solución militar hoy, solución política mañana. No les importa la falta de lógica cuando no están de acuerdo en que accedan al poder los que no han sido elegidos democráticamente, cuando es evidente que los actuales miembros de la Junta y el poder actual no han sido elegidos democráticamente. Hay, sin embargo, una gran presión dentro de los Estados Unidos que está exigiendo a sus gobernantes el que no propicien una solución militar, el que cesen en toda forma de intervención militar. Sectores religiosos tan moderados como la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y el Consejo Nacional de Iglesias se oponen firmemente a toda forma de intervención militar norteamericana. Tampoco puede desconocerse la gran presión internacional hecha sobre el gobierno de los Estados Unidos por países latinoamericanos y europeos para que retiren sus manos de El Salvador o para que faciliten una solución política inmediata, a través de un proceso de mediación, que inexplicablemente les resulta inaceptables, porque supondría un reconocimiento oficial de la oposición, que no están dispuestos a conceder hasta que lo vean como irremediable o como menos desventajoso para los intereses americanos.

Posición muy distinta es la representada por otros países tan democráticos y antisoviéticos como los Estados Unidos.

A la cabeza de ellos puede señalarse a México, país mucho mejor conocedor que su vecino de los problemas latinoamericanos, y país más próximo geográficamente a El Salvador y más amenazado (?) por lo que en él pudiera ocurrir tras un triunfo revolucionario. México, más inclinado al FDR que a la actual Junta de Gobierno, busca una solución política y presiona para que las partes en conflicto busquen una salida negociada. Incluso ha ofrecido sus buenos oficios y hasta su mediación, si ésta es requerida o aceptada por ambas partes. En parecida posición están Panamá y Ecuador, que desearían y buscarían una solución política a través de la mediación.

Algunos de los países europeos también es-

tán en favor de una solución política por el camino de la mediación, a pesar de la campaña de los Estados Unidos para desprestigiar al FDR como interlocutor válido de una salida democrática rápida para El Salvador. Y, sobre todo, la Internacional Socialista, no sólo se ha declarado en favor de la mediación sino que ha tomado la iniciativa en favor de ella y sigue propiciándola, a pesar del rechazo de sus gestiones por el sector militar, predominante en la actual estructura de poder salvadoreño. También la Democracia Cristiana Internacional, a remolque de los socialdemócratas, quisiera algún modo de mediación, en que pudieran hacerse presentes ellos mismos, como favorecedores de los intereses de su partido en El Salvador. En esta línea Venezuela podría también estar interesada en participar en una mediación, sobre todo si México también interviniera en ella.

Y lo que pudiera parecer más llamativo, también Cuba y Nicaragua están a favor de una mediación y no precisamente por falta de fervor revolucionario. Ambos países parecen pensar que una continuación, con su posible agravamiento, del conflicto armado en El Salvador no sólo causaría enormes pérdidas al pueblo salvadoreño sino que desestabilizaría toda la zona y les exigiría un tributo militar que prefieren dedicarlo a la reconstrucción en un caso y a la consolidación en el otro de sus propios países. Ambos países no parecen temer que una mediación y una salida negociada, dadas ciertas condiciones, no supondrían un paso negativo para la liberación del pueblo salvadoreño. Como el FDR-FMLN no se ha propuesto más que la existencia de un gobierno democrático-revolucionario y ha presentado una Plataforma de Gobierno, todavía negociable, que difícilmente podrá ser considerada como extremista por unos mediadores justos, Cuba y Nicaragua prefieren una salida negociada y no una salida militarista, que traería enormes costos y que, aun en caso de triunfo, no permitiría por condiciones objetivas insuperables un poder político y unos programas de gobierno, que pudieran estimarse como socialistas.

También la Iglesia está por una solución política que implique de algún modo el diálogo y el consenso de las partes en conflicto. Así parece desprenderse de las ideas de Juan Pablo II transmitidas por Monseñor Rivera tras su reciente audiencia en el Vaticano. Ya antes la Conferencia Episcopal de El Salvador se había ofrecido como mediadora en el conflicto y su mediación



fue rechazada por el FDR-FMLN, al considerar que la mayor parte de los obispos se habían declarado contra ellos. Sin embargo, la posición de Monseñor Rivera es vista como más aceptable. Una parte importante de la Iglesia, pues, tanto en el interior del país como fuera de él, está presionando a ambas partes para que abandonen la solución militar y sometan, incluso el poder de las armas, a los resultados de una solución política consensuada.

No puede decirse que este conjunto de naciones, de instituciones y de fuerzas sociales se inclinen hacia la solución política, engañados por el comunismo internacional o para salvar al sector democrático-revolucionario en quiebra. Más bien hay que ver en el conjunto de esas fuerzas un argumento poderoso sobre que ambas partes en conflicto están lo suficientemente firmes como para prolongarlo hasta límites intolerables para el pueblo salvadoreño y para la comunidad internacional. El que Estados Unidos no coincida de momento con esta posición hace que la presión internacional sea menor, pero no mengua en nada la razonabilidad de quienes con intereses egoístas menores están proponiendo una solución negociada, una salida política, y están presionando fuertemente para que se acepte.

2.6. El sexto hecho fundamental es que ambas partes en conflicto hablan de la necesidad de una solución política, aunque entienden ésta de forma muy distinta.

La Junta cívico-militar ha ofrecido la solución política en forma de elecciones a mediano plazo, mientras que ha dado un no rotundo a la mediación propuesta formalmente por la Internacional Socialista en la visita de Wischnewsky, sin que se sepa cuál ha sido la propuesta de la Democracia Cristiana Internacional ni la respuesta a ella por parte de la Democracia Cristiana salvadoreña.

De hecho, la actual cúpula militar y, consiguientemente, la Junta cívico-militar se pliega a la solución norteamericana y pone su máxima esperanza en la destrucción militar del adversario, la cual sigue creyendo ser factible a corto plazo. No parecería razonable estar proponiendo elecciones para 1982, si es que en el país por esas fechas siguiera el estado de guerra civil que hoy impera y siguieran sin ser dominadas las posiciones militares del FMLN. Hasta no probar su incapacidad para derrotar en el campo de batalla al adversario y de apartar a la población civil de su simpatía por el FDR-FMLN a través de la conjunción del factor militar de la represión con el factor político de las reformas, no daría paso a otro tipo de solución política. Las elecciones son una promesa a futuro que permiten seguir hablando de solución política, mientras en el intervalo todo el esfuerzo se pone en la solución militar.

Y es que una solución política a corto plazo, cualquiera sea su forma, no le parece conveniente a la actual cúpula militar y a la Junta cívico-militar. Si toma forma de mediación, esto implicaría de entrada el reconocimiento del peso político y social real de la parte contraria; casi se vería la Junta y su Fuerza Armada a negociar de igual a igual con el FDR-FMLN, lo cual supondría reconocer a éste una beligerancia, que no están dispuestos a concedérsela. En una mediación, a la que se hicieran presentes como mediadores observadores justos, la Junta y, sobre todo, la Fuerza Armada ven mayores desventajas que ventajas: reconocimiento político del adversario, revisión internacional de las prácticas represivas atribuibles a la Junta y a la Fuerza Armada, tregua que permitiría la recuperación militar del enemigo, aislamiento de la posición intervencionista norteamericana, tensiones internas en la

actual estructura de poder y en las relaciones entre los militares, el PDC y los sectores capitalistas... En contrapartida no ve ventajas sustanciales, porque ni la pacificación ni la ampliación y ablandamiento de las propuestas democrático-revolucionarias, aunque fueran muy convenientes para el país, no lo serían ni para la actual cúpula del PDC ni para la actual cúpula militar.

En vez, pues, de la mediación y la subsiguiente negociación, hablan de diálogo, de deposición de las armas y de la violencia y, a más largo plazo, de elecciones libres. Sin embargo, hay fuerzas dentro de la actual alianza en el poder tanto entre los militares y políticos como entre los empresarios, profesionales y capas medias, que podrían ver, complacidos, esfuerzos sinceros en favor de una solución política. Hay fuerzas, entre las que conviene señalar a sectores importantes de la Iglesia, que no tienen un juicio tan severo respecto del conjunto de la oposición y que están persuadidas desde hace tiempo que sin la participación real pactada de la izquierda en el poder no es posible la paz y la estabilidad en El Salvador.

Por parte de la cúpula militar y de la Junta hay, por tanto, una mayor confianza en la maniobra militar que en la maniobra política, pero se está claro que es necesario encontrar algún modo de solución política. ¿Qué ocurre, por parte del FDR-FMLN?

El FDR-FMLN se ha visto forzado a pensar que es necesario dar una gran importancia a la solución política en el conjunto de una estrategia global que incluye también una fuerte presión militar. Las razones que le han obligado a formar este juicio parecen haber sido las siguientes: las naciones amigas ven como muy conveniente una solución negociada, persuadidas de que una negociación justa llegaría a unos resultados satisfactorios para las necesidades objetivas de El Salvador y para las justas exigencias del sector democrático-revolucionario; es necesario acortar lo más posible el actual proceso de destrucción de vidas humanas y de recursos materiales, pues de lo contrario el futuro del país se vuelve casi imposible, sea quien fuera el triunfador del conflicto; la mediación traería más ventajas que desventajas a los sectores populares. Por todo ello el FDR-FMLN propone la búsqueda de una solución política a través de la mediación y compromete en ella su palabra y a sus mejores aliados.

La Fuerza Armada de El Salvador ofreció al público un documento de la Comisión Política

Diplomática del FDR-FMLN en el que aparecía la mediación como una maniobra táctica (cfr. El Diario de Hoy, 27 de abril de 1981, pp. 9 y 46). Pero el documento tiene fecha de 3 de febrero y tiene el carácter de propuesta a la Comandancia General, sin que conste la respuesta de este organismo, y sin que se nos dé a conocer lo que se haya podido decidir en los tres meses subsiguientes. Más tarde se han dado declaraciones de un prominente miembro de las FPL, rectificadas en parte por el FMLN y, a su vez, declaraciones oficiales en nombre de todo el FMLN, en las que se afirma que el FMLN y el FDR aceptan una mediación internacional que podría conducir posteriormente a una negociación para la solución política de la actual guerra de liberación, para ahorrar mayores sacrificios al pueblo. (Barricada, 1 de mayo, 1981). Más aún, en esas mismas declaraciones se concreta que el FMLN y el FDR han propuesto una comisión mediadora internacional compuesta por miembros de la Internacional Socialista y de la Democracia Cristiana europea y por dos personalidades de carácter independiente, una de Estados Unidos y otra de América Latina (ib.).

Tal compromiso público refuta la idea de que la mediación sea una pura maniobra táctica para ganar tiempo y para propiciar un pronto triunfo militar. Es bien probable que el FDR-FMLN siga creyendo que sin un fuerte respaldo militar propio no sería respetado ni podría negociar sin traicionar los intereses justos del pueblo organizado, que sin ese respaldo sus contrarios no cederían a la fuerza de las razones ni siquiera a la movilización de las masas. Pero también es muy probable que el FDR-FMLN ha desabsolutizado y desexclusivizado la solución militar y, sobre todo, ha tomado completamente en serio la mediación, convencido de la justicia de su causa y del respaldo popular que le asiste.

2.7. El séptimo hecho fundamental es que la realidad objetiva de la situación salvadoreña no tolera la prolongación del conflicto y exige una pronta solución del mismo.

Este hecho no es más que una consecuencia del hecho que consideramos en primer lugar (2.1.) y que definía la situación de El Salvador como una situación-límite. Una situación-límite, por su propia naturaleza, exige y lleva consigo la necesidad de salir de ella. Pero la intolerabilidad del alargamiento de la actual situación no es una

mera consecuencia lógica de lo que ha venido ocurriendo, sino que es por sí misma un hecho incontestable, que podrá ser paliado por esfuerzos voluntaristas, pero no podrá ser anulado.

La intolerabilidad objetiva del ordenamiento estructural salvadoreño y de las sucesivas políticas gubernamentales aparece en el hecho mismo del surgimiento de un poderoso movimiento revolucionario y del estado actual de guerra civil en que vive el país. Sólo por la radicalidad opresiva y represiva de la estructura socio-política, militar y económica de El Salvador se explica el que en diez años se haya logrado una organización de masas y la constitución de un ejército popular que, dada la situación geográfica de El Salvador y su aparato institucional, será difícil encontrar algo semejante en ninguna otra parte del mundo. Algo han tenido que ver en esto los dirigentes, pero los dirigentes poco podrían haber hecho en circunstancias tan adversas, si no jugasen a su favor las condiciones objetivas del país. Y de estas condiciones objetivas sólo pueden considerarse como favorables las que son resultado de una injusticia estructural y una violencia represiva absolutamente intolerables.

La guerra civil declarada no es sino la expresión más llamativa de esta intolerabilidad. No es la guerra civil la causa de la intolerabilidad de la situación, sino que es efecto de ésta. Y cuando se llega a una guerra civil de las características de la actual guerra civil salvadoreña, en la que es una gran parte del pueblo la que se levanta contra el poder establecido, es que algo realmente intolerable le está ocurriendo a ese pueblo. Los engaños, la propaganda nunca podrán originar tanto sacrificio, tanta entrega por tanto tiempo y por tantos hombres. No se niega que haya un alto grado de idealismo en muchos de los combatientes, pero ese idealismo es las más de las veces el resultado del choque brutal de una realidad intolerable sobre espíritus generosos, a los que la situación de El Salvador no ha ofrecido otra alternativa que la del sacrificio y la de la lucha.

Pero esta guerra civil, resultado principalmente de la intolerabilidad objetiva de la situación, se va convirtiendo a su vez en intolerable. La guerra civil por parte de la Junta tiene dos frentes fundamentales: el de la represión que causa miles de bajas entre la población civil simpatizante de la izquierda, o sospechosa de simpatizar, y el de las acciones estrictamente militares, que también causan multitud de bajas indiscrimi-

nadas entre la población civil, pero cuyo objetivo primario son las fuerzas armadas del enemigo. La guerra civil por parte del FMLN tiene a su vez dos frentes fundamentales: el de la resistencia activa y militar a los ataques y ofensivas del ejército enemigo tratando de causarle bajas y pérdidas estrictamente militares, y el del sabotaje tanto a las vías de comunicación con propósito estrictamente militar como a las fuentes de producción, aunque no deje de haber algunas acciones aisladas que pueden considerarse de índole terrorista.

De ambas posiciones lo que resulta más intolerable para el país es, en primer lugar, la represión masiva y, en segundo lugar, la acentuación del sabotaje a los medios de producción. No son dos dimensiones comparables homogéneamente porque en un caso están en juego vidas humanas inocentes y en el otro medios de producción materiales. Pero por razones de cualidad ética muy distinta la prolongación de estos tipos de actividad resultan intolerables.

Está, ante todo, la represión. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Se pensará en alcanzar la cota de doscientos mil muertos, que algunos estrategas del anticomunismo consideran la cifra mínima para asegurar el aplastamiento definitivo de la oposición? Ya llevamos en año y medio cerca de veinte mil víctimas, la mayor parte de ellas reconocidas por personas e instituciones imparciales como injusta e ilegalmente asesinadas. La presencia del PDC en la Junta y en el gobierno no han logrado frenar este baño de sangre y de poco sirve decir que, si ellos no estuvieran en el poder, el ritmo de muerte y sangre se aceleraría aún más. Tal desangre popular no es sólo injusto e intolerable sino que va a hacer cada vez más difícil la pacificación y reconciliación. Por otra parte tal río de sangre cada vez va a ser más difícil de tolerar por la conciencia política internacional. Hasta la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con apoyo de los republicanos en una de sus comisiones más importantes ha condicionado la ayuda a El Salvador al cese de esta permanente y masiva violación de los derechos humanos.

Está, por la parte contraria, el sabotaje. La continuada destrucción de los escasos recursos productivos de El Salvador no sólo está haciendo difícil las tareas económicas actuales sino dificultando al máximo el futuro desarrollo del país. Es claro que si prosigue la guerra civil y prosigue la represión va a proseguir también el sabotaje. Y es claro que la izquierda está en condiciones de

llevar el sabotaje a límites mucho más extremos. No es difícil imaginar hasta qué punto puede llegar la destrucción de recursos por parte de un sector revolucionario desesperado.

Singular importancia para medir el Índice de intolerabilidad de la actual situación salvadoreña es la consideración de la coyuntura económica, que está atravesando el país, a pesar del decidido apoyo norteamericano. Nadie puede esconder que esa coyuntura es gravísima y que, si el conflicto prosigue, irá rápidamente a peor. Estudios solventes muestran índices alarmantes. Así tenemos, por ejemplo, que el Producto Territorial Bruto (PTB) alcanzó durante 1980 —a precios de 1962— niveles inferiores a los de 1976 y aún es posible que la oferta global de bienes y servicios haya descendido a niveles inferiores a los alcanzados durante 1974. El PTB per cápita, a precios de 1962, alcanzó en 1980 niveles inferiores a los de 1971 y, de continuar las tendencias, en 1981 podría descender a niveles inferiores a los de 1965 (cfr. "Fichas para análisis", CUDI, 1, 25 de febrero, 1981). En términos reales, el consumo total de la población disminuyó en el período 1979-1980 entre un 9.13 y un 17.7%; el nivel de consumo del salvadoreño promedio descendió en 1980 a niveles inferiores a los de 1970. De acuerdo a informaciones oficiales, en 1980 el 47% de la población tuvo ingresos mensuales promedio inferiores a los 20 dólares (50 colones), y las mismas fuentes señalan que el 94% de la población percibe ingresos mensuales promedio no mayores a los 80 dólares; el 76% del pueblo salvadoreño, esto es, más de 3 millones de habitantes, carecen del ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Si sigue esta tendencia, los niveles de consumo en 1981 serían similares a los observados en los finales de la década del cincuenta y principios de la del sesenta, cuando todavía no había comenzado el desarrollo económico, propiciado por el Mercado Común Centroamericano (ib. 2, 19 de marzo 1981). Por otra parte la inversión privada bruta en activos fijos e inventarios disminuyó, como mínimo, en 38.5% y pudo incluso llegar a 51.62%, de modo que la inversión privada total, expresada como porcentaje del PTB, ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos veinte años y se encuentra a un nivel similar al del período 1939-1945; sólo en 1980 habrían cerrado o se habrían paralizado 113 empresas con una desinversión de 64.2 millones de colones y un desempleo de 8,329 trabajadores (ib. 4, 24 de abril, 1981).





Este pequeño resumen de datos lleva a la conclusión no sólo de la gravedad y profundidad de la crisis económica de El Salvador, sino que permiten afirmar que tal vez haya que volver a 1932, el año del levantamiento campesino, para encontrar una crisis económica semejante.

Ahora bien, es claro que una de las causas inmediatas más graves de esta deplorable situación es el actual conflicto social que vive el país. Y es claro también que la continuación del conflicto hará de todo punto intolerable esa situación. Todo ello abona la necesidad de una solución rápida al conflicto para ponerse a remediar las causas estructurales y coyunturales de esta catástrofe, que cada vez hará más invivible y más inviable la vida de la mayoría de los salvadoreños. No puede olvidarse, por otra parte, el dato fundamental de que para dentro de dieciocho años, El Salvador tendrá que dar solución a cerca de nueve millones de habitantes. El descontento y la desesperación afecta, en razón de esta crisis económica, ante todo a la gran masa obrera y campesina; pero afecta también a las clases medias y asimismo a los empresarios, para quienes la inversión no tiene futuro alguno. Estas causas objetivas de descontento y aun de desesperación no podrán menos de reflejarse pronto en actitudes subjetivas violentas y desesperadas.

Todo ello nos lleva a concluir que la mayor parte de la población busca o, al menos, necesita una pronta solución al conflicto del país. La necesitan con distinta urgencia y en diferente dirección, pero la necesitan. No ponemos esta afirmación a nivel de hecho fundamental, porque no tenemos comprobación empírica de la misma y porque es como un supuesto de todo este trabajo. Se necesita solución, profunda y urgente solución. La necesitan los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, que sólo en El Salvador pueden trabajar y que ya no pueden trabajar en las actuales condiciones; la necesitan las capas medias y las grandes mayorías no comprometidas directamente en la acción política, pero que sienten de mil formas las consecuencias del conflicto; la necesitan también las mayorías populares organizadas que llevan sobre sus hombros la gran parte de la escasez, de la angustia y de la muerte. Para toda esta amplia y significativa parte del pueblo, la solución profunda y rápida del conflicto es una necesidad real y una necesidad sentida. Puede que haya también otros sectores que la deseen, pero no con la misma pura y justa necesidad que los aquí nombrados.

2.8. El octavo hecho fundamental es la existencia de dos fuerzas en conflicto, que ambas deben considerarse como poderes públicos.

La comprensión de este hecho no es fácil. En la conciencia de la actual Junta e incluso en muchas de las instituciones sociales y de las personas en El Salvador, por no hablar de la opinión internacional, lo que se daría en la escena salvadoreña es el levantamiento o la insurrección de unos subversivos o, en el mejor de los casos, guerrilleros revolucionarios contra el poder de un Estado legalmente establecido. A todos estos grupos les es difícil aceptar que el conflicto de El Salvador se esté dando entre dos poderes que, aunque puedan tener fuerza desigual, deben situarse en el mismo plano en cuanto poderes públicos.

Si vemos el problema desde la perspectiva de cada uno de los dos grupos en conflicto, tendremos que, por parte del gobierno, el FDR-FMLN es un grupo ilegal de subversivos, que se ha levantado contra el orden establecido y al que el Estado no tiene más que aplastar; lo que tenían de justas sus demandas, ha sido asumido por las reformas de la actual Junta, con lo que sus banderas han perdido razón de ser y su antiguo apoyo popular ha desaparecido. Si vemos el problema por parte de la oposición, el actual gobierno es un gobierno que representa unos intereses antipopulares, es responsable por comisión o por omisión de crímenes y violación de los derechos humanos que llegan al grado de genocidio (cfr. Tribunal permanente de los pueblos, Sección sobre El Salvador, México, 9 al 11 de febrero de 1981), no es capaz de gobernar el país y resolver sus problemas más perentorios, ha entregado la soberanía nacional en manos de los Estados Unidos y debe, en consecuencia, ser derrocado.

Desde la perspectiva en que este trabajo se ha situado metodológicamente podemos prescindir de las apreciaciones de unos y de otros para atenernos en lo posible a la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos muestra que sea lo que fuere la verdad de las mutuas apreciaciones —punto en sí mismo muy importante para discutir la legitimidad de un poder y de otro, el derecho a la insurrección o el derecho a la defensa del Estado, pero que no es el punto que ahora nos interesa discutir— nos encontramos ante dos poderes fácticos, al menos fácticos, que han entrado en litigio y confrontación.

El actual gobierno de El Salvador es un go-

bierno de hecho. No ha sido electo constitucionalmente, ha abandonado la posible legitimidad real que le pudiera haber venido del 15 de octubre y no ha conseguido ni explícita ni implícitamente el apoyo popular. Estas afirmaciones pueden sustentarse con hechos inapelables y, por lo tanto, están fuera de discusión. La afirmación de Monseñor Rivera de que esta Junta y este gobierno representan un mal menor debe ser aclarada en su significado y posteriormente probada; pero ya su misma formulación indica la precariedad del derecho y de la legitimidad que le asiste al gobierno. Pero que sea un gobierno de hecho y no de derecho, no quita para que se le reconozca como poder fáctico y para que se le reconozcan ciertas obligaciones y ciertos derechos. Un gobierno de hecho por ilegítimo que sea en su origen puede gozar de una legitimidad relativa y transitoria, siempre que mantenga cierto poder real y siempre que no se dé otro poder que pueda representar los intereses públicos del Estado dentro y fuera de las fronteras. No puede olvidarse además que el actual Gobierno de El Salvador es reconocido como tal gobierno por la comunidad internacional. Decir, por tanto, que el actual gobierno de El Salvador es un gobierno de hecho no es tanto una afirmación cualitativa sino una afirmación definitiva.

Por el lado contrario el FDR-FMLN es también un poder fáctico público y, como tal, está de hecho en capacidad de disputar el poder del Estado al gobierno actual. Que lo está disputando es un hecho y que es un poder público también es un hecho, que puede comprobarse y que es reconocido internacionalmente, aunque este reconocimiento de hecho no le conceda legalidad jurídica. El FDR-FMLN cuenta con un ejército popular que para el tamaño de El Salvador y para el número de los miembros de la Fuerza Armada es realmente considerable, como lo prueba la preocupación y las acciones de los Estados Unidos; cuenta con un territorio, que si no es de su dominio total y estable, lo es al menos como zona de influencia; cuenta con un respaldo popular muy activo y extendido por todo el territorio nacional; cuenta finalmente con el respaldo explícito de varios países e instituciones públicas, y esto no sólo en el campo socialista sino entre naciones de la más comprobada democracia: el FDR-FMLN tiene representaciones diplomáticas internacionales, reconocidas de hecho por muchos gobiernos y recibidas de hecho en las más altas esferas de poder.

El FDR-FMLN reconoce a la actual Junta como poder fáctico y por eso busca llegar a un acuerdo por el camino de la mediación internacional. El gobierno y la Junta de El Salvador no atribuyen al poder fáctico del FDR-FMLN la suficiente legitimidad como para entablar negociaciones con él, no le reconocen suficiente fuerza y representatividad para discutir con él el problema del poder. Es la posición de Estados Unidos que sostiene que no se puede dar el poder a quien no lo gana en elecciones, sin reconocer que el actual gobierno no ha ganado el poder en elecciones ningunas. Pero una gran parte de la comunidad internacional, interesada en el caso de El Salvador, reconoce de plano al FDR-FMLN como poder fáctico público y se atreve, en consecuencia, a ofrecer su mediación pública.

Al FDR-FMLN le ha costado tiempo el reconocer a la Junta como un poder fáctico, al que se puede combatir, pero con quien también se puede negociar sin desdoro del compromiso político revolucionario. La Junta, al menos en su vertiente militar, no acaba de reconocer al FDR-FMLN como un poder fáctico con el que se puede negociar por el camino de la mediación. El Coronel Jaime Abdul Gutiérrez, Vice-Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada de El Salvador dio un no rotundo a la mediación en nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, "ya que acceder a ella significaría prestarse a una maniobra del comunismo internacional" (El Diario de Hoy, 28 de abril, 1981, p. 35), con lo que está acusando a México y Venezuela, a la Internacional Socialista, a la Democracia Cristiana europea y a otros países plenamente democráticos de estar cayendo en la trampa del comunismo internacional. Pero no niega ni que el actual gobierno sea un poder fáctico que debe dar paso a unas elecciones, ni que sea un poder fáctico el FDR-FMLN. Pero no negarlo no es lo mismo que afirmarlo. Y lo que se necesita es un reconocimiento explícito de ese poder fáctico, sin el que no es posible una solución para el país.

Y esta es otra forma de afirmar que el FDR-FMLN es un poder fáctico en El Salvador, con el que se debe contar para cualquier solución proyectada. De nada sirve aquí hablar de comunismo o de imperialismo. Estamos ante hechos reales y estamos ante la necesidad real de encontrar la verdadera solución del país, montada, eso sí, sobre una solución verdadera. Y no puede negarse que si el FDR-FMLN no acepta esa solución,



no podrá hablarse ya de verdadera solución y, menos aún, de solución verdadera. Si tal vez puede negársele la capacidad inmediata de un triunfo militar, no puede negársele la capacidad de desestabilización ni la capacidad de destrucción. Estamos atendiendo —lo repetimos una vez más— a consideraciones de hecho, de difícil contradicción, precisamente para buscar las bases más sólidas sobre las que construir una solución. Guste o no guste a las partes en conflicto es menester reconocer que, al menos, ambas son partes relativamente poderosas, con suficiente fuerza para causar gravísimos y tal vez irreparables males al pueblo salvadoreño, que debería ser el norte que orientara todas y cada una de las acciones y de las decisiones.

Terminamos con este octavo hecho fundamental la segunda parte de este trabajo. Sólo teniendo en cuenta el peso de cada uno de ellos y su armonización conjunta puede uno acercarse con responsabilidad a dar una respuesta razonada a la pregunta de qué solución ha de trabajarse en El Salvador, si una solución política o una solución militar. Aparentemente ya ambas partes han dado su respuesta; la solución debe ser una solución política. La Junta entiende esa solución política como una oferta de elecciones libres, que tendrían lugar en marzo de 1982 para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. El FDR-FMLN entiende esa solución política como un proceso de mediación, que puede terminar en una solución negociada del actual conflicto. Pero el análisis de los hechos, expuesto en las páginas anteriores, obliga a puntualizar más el carácter de la solución política, no sólo en su determinación de elecciones o mediación, sino en su relación con la solución militar. Es lo que se intentará hacer en la tercera parte de este trabajo. Sólo una respuesta que concilie las exigencias de estos ocho hechos fundamentales podrá tener garantías para que la solución propuesta sea, a la vez, verdadera solución y solución verdadera.

3. Una solución político-militar para El Salvador.

Este trabajo que discute el tipo de solución que debe darse al conflicto salvadoreño tuvo su origen y ocasión en una Mesa Redonda organizada por el Grupo de Análisis e Información sobre los Problemas de Centroamérica y que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica el pasado 30 de abril. En ella participaron el Lic. Rodolfo Solano Orfila, miembro del Directorio Político del Partido Liberación Nacional; el Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz, perteneciente a la coalición política Pueblo Unido; el Lic. Jaime González Dobles, miembro del Partido Demócrata Cristiano costarricense, y el autor de estas páginas. Todos los participantes lo hicimos a título personal sin llevar representación oficial ni oficiosa alguna, apoyados en sus análisis y opciones dentro de un ambiente estrictamente universitario, que en ningún momento hizo falta recordar y menos urgir. Pues bien, para sorpresa general, pues no había habido diálogo previo alguno entre los participantes, los cuatro coincidimos en que la solución del actual conflicto salvadoreño no podía ser ni puramente política ni puramente militar. De distintas formas y por razones diferentes se sostuvo que la solución debiera ser política y militar. Quizá incluso en algunos casos con mayor acento en lo militar que en lo político. Sirva este pequeño recuerdo como introducción a estas reflexiones finales.

3.1. Una solución puramente militar o predominantemente militar no es la solución adecuada para El Salvador.

Se entiende aquí por solución pura o predominantemente militar aquella que hace del enfrentamiento armado y/o del poderío militar la razón decisiva del triunfo y la práctica fundamental para conseguirlo. Dicho en otros términos más concretos, los partidarios de esta solución pondrían toda su esperanza en el enfrentamiento militar de suerte que se dejaría al resultado de ese enfrentamiento lo que fuera a ser de El Salvador. Es claro que tras cada una de las partes en conflicto armadas hay una concepción político-económica e incluso una cierta organización política, pero todo lo que ello representa se pondría en juego en el campo de la guerra. Los armados decidirían así el destino del país y quien tuviera mayor fuerza bélica tendría mejor razón política.

Vamos a razonar por qué esto no debería ser así, por qué no es ésta la solución adecuada, si tenemos en cuenta dos hechos fundamentales examinados en la parte anterior.

A. Una solución militar por parte de la Fuerza Armada, intervenida actualmente por el ejército de los Estados Unidos, aunque fuera materialmente posible, dejaría sin resolver el problema nacional y no permitiría la anulación del poder oligárquico e imperialista, que gravitan sobre la realidad salvadoreña y son la causa principal de sus males.

Es dudoso, en primer lugar, que la actual Fuerza Armada, incluso con el masivo apoyo que está recibiendo de Estados Unidos, pueda derrotar a corto plazo y de una manera total al Ejército Popular y, menos aún, a la totalidad de las organizaciones político-militares. Si el plazo se alargara muchos meses más y se necesitaran todos esos meses para un triunfo militar total, para que éste se diera se necesitaría la muerte de muchos más miles de salvadoreños y la destrucción irreparable a mediano plazo de una parte importantísima de los recursos productivos del país. Basta con reflexionar sobre los miles de muertos, cerca de veinte mil, causados en los últimos quince meses, para hacerse una idea de lo que exigiría de aniquilación total no sólo de unas fuerzas militares poderosas y con alta moral sino de miles de organizados, que han mostrado hasta ahora convicción y decisión inquebrantable. El gobierno sabe bien que sus ofertas de amnistía han tenido resultados exiguos en cantidad y, sobre todo, en cualidad.



Por otra parte, este hipotético triunfo militar completo o, por lo menos, decisivo, no ofrece garantías de democratización para el país. Un triunfo militar llevaría lógicamente a una mayor militarización del proceso y aun sumisión todavía mayor de un debilísimo poder político, que no habría podido triunfar políticamente, a un fortalecido poder militar, que se atribuiría totalmente el triunfo. La Democracia Cristiana salvadoreña disculpa su impotencia para controlar los excesos de la Fuerza Armada y, especialmente, de los cuerpos de seguridad por su falta de poder efectivo incluso para castigar crímenes comprobados contra ciudadanos, nacionales y extranjeros, inocentes y aun contra los propios miembros de su partido. No hay ninguna razón válida para pensar que esto cambiaría tras un triunfo de los militares.

Quienquiera que examine con objetividad el proceso seguido por lo que fue inicialmente el movimiento del 15 de octubre, no puede menos de reconocer una planeada y progresiva derechización del mismo tanto en las medidas tomadas como, sobre todo, en la composición de la Junta, del Gobierno y, principalmente, de la cúpula de mando militar. Los hechos son tan palmarios y comprobables, que no es preciso ni recordarlos. Lo más progresista que ha quedado en la Junta y en el gobierno es la facción derechista de la Democracia Cristiana, que como tal no tenía representación alguna en la primera Junta. Por otro lado, es evidente el desplazamiento de Majano y de los majanistas del poder militar para que éste quedara en manos mucho más derechistas.

Podría objetarse que esto ha ocurrido como respuesta a la radicalización de la izquierda, de modo que, una vez aniquilada la izquierda democrático-revolucionaria, se estaría de nuevo en posibilidad de regresar al espíritu del 15 de octubre. Es verdad que no puede ignorarse el papel que jugaron las organizaciones revolucionarias de masas para entorpecer el proceso iniciado el 15 de octubre. Pero éste no es el hecho fundamental para explicar la derechización del proceso, que desde un primer momento fue iniciado subrepticamente con la constitución de una cúpula militar, que respondía más a intereses militares institucionalistas que a las exigencias de un proceso que se calificaba a sí mismo como revolucionario y que despertó expectativas aun en gobiernos como el de Nicaragua y en organizaciones internacionales como la Internacional Socialista.

Pero si reflexionamos en que el 15 de octubre fue posible precisamente por la presión revolucionaria de las organizaciones populares y por el consiguiente desgaste de la estructura político-militar, cuya cabeza visible era el Presidente Romero, fácilmente llegaremos a la conclusión de que sin esa presión ya no habría motor alguno para la revolución que necesita el país. Ya el poder oligárquico no tendría que conceder nada para quitar base social al movimiento revolucionario. El poder oligárquico podría regresar triunfante, como lo hizo tras la derrota de la Transformación Agraria, que la Fuerza Armada prometió defender hasta la última gota de su sangre en 1976. Si en los actuales momentos y circunstancias, después de haber prometido una determinada Reforma Agraria, se habla ya, por presión de la Administración Reagan no sólo de que no se van a hacer más reformas sino que se va a detener la segunda fase de la prometida Reforma Agraria, ¿qué se puede esperar tras la hipotética derrota total de quienes han sido indirectamente sus verdaderos impulsores?

El triunfo militar absoluto por parte del gobierno tal vez podría permitir un cierto suavizamiento de la represión, pero sería en el supuesto de que ya no hubiera qué reprimir, porque se habría dado muerte o estarían exilados todos cuantos disintieran del gobierno. Pero no ofrece garantía alguna de poder enfrentar seriamente la solución de la situación-límite, de la que hablábamos en la segunda parte.

B. Una solución militar por parte del FMLN, aunque fuera posible, no respondería a lo que es el movimiento revolucionario y podría llevar a desviacionismos importantes en el modo de alcanzar la victoria y en el modo de administrarla.

De hecho no parece probable que el FMLN pueda conseguir una victoria total a corto plazo, aunque concentrara todas sus fuerzas y energías en la lucha militar. Así parece deducirse de la ofensiva de enero y así parece deducirse del comportamiento militar seguido en estos cuatro últimos meses. No parece que será fácil una rearmamentización exterior cualitativamente superior a lo que hasta ahora se posee y de todos modos queda la duda de si el ritmo de su rearmamentización puede competir con el envío de armas norteamericano a la Fuerza Armada. Pudiera pensarse en una utilización cada vez mejor de los recursos propios y pudiera contarse con el desánimo moral de la tropa contraria, pero nada de esto hace

probable que en corto plazo se consiga una victoria militar total. Y el plazo es un elemento esencial que no puede descuidarse.

Otra cosa sería que el FMLN pudiera solidificar y aun extender sus posiciones y el terreno que domina, que pudiera infligir al enemigo golpes importantes. Pero, aunque esto llegara a ser así, quedaría siempre un déficit militar, que haría que la solución no fuera puramente militar. De hecho, sin dejar lo militar, el FDR-FMLN está buscando y queriendo un elemento esencialmente político, como es la mediación, lo cual ya no permite hablar de solución puramente militar.

Pero es que la experiencia de los últimos meses de 1980, donde se concentraron casi todos los esfuerzos en preparar una solución casi exclusivamente militar, quizá no en la teoría y en el propósito, pero sí en la práctica, mostró no sólo la ineficacia de esa dirección sino incluso cierta inconsecuencia con los propios principios. Según éstos, no debería haberse reducido la acción revolucionaria a la solución militar con abandono del cultivo de las masas y de otros sectores inter-

medios. La debilidad de la insurrección general y de la huelga general son prueba de ello. La concentración en lo militar, a pesar de las alianzas políticas en el interior y en el exterior, demostró ser un error tanto teórico como práctico.

Ciertamente, por lo visto hasta ahora, el FDR-FMLN no tiene los mismos peligros de militarismo que los que tiene la alianza cívico-militar actualmente en el poder. La relación es inversa en un caso y en otro: mientras el PDC ha ido teniendo cada vez menos poder práctico en las grandes decisiones políticas respecto de los militares, el FDR lo ha ido teniendo cada vez mayor, de modo que el carácter estratégico y no puramente táctico de la alianza FDR-FMLN es cada vez mayor. Pero es que incluso los comandantes de la conducción militar son políticos que han tenido que dedicarse a las armas, de modo que su característica principal no es la de ser militares por vocación; mientras que en el caso contrario tenemos un caso más de la larga tradición salvadoreña y latinoamericana de los militares inmersos en la dirección política.



3.2. Una solución puramente política es en las actuales circunstancias una pura abstracción y no contaría con un respaldo real interno que la sustentase.

Se entiende aquí por solución puramente política, aquella que supusiese la ausencia de fuerza y presión militar por ambas partes en conflicto, como si se tratase, por ejemplo, de dos grandes partidos políticos o conjuntos de ellos que fueran a decidir su triunfo en unas elecciones, ante la mirada de un poder militar que ni iba a presionar ni iba a hacer nada, sea cual fuere el resultado de las elecciones. Y lo mismo que el ejemplo de las elecciones podría ponerse el de la mediación, el del arbitraje o cualquier otro. Nada parecido a esto se da en la realidad y por eso hablamos de abstracción o de sueño ilusorio.

A. Es evidente que el gobierno cuenta con una Fuerza Armada y que el proyecto político hoy seguido en la práctica en El Salvador es el proyecto de la Fuerza Armada o, al menos, la Fuerza Armada lo ha aceptado aparentemente como suyo. Como quiera que sea, la Fuerza Armada tiene su propio proyecto político y lo propugna y sostiene en virtud de la fuerza de las armas. Pudo dar el golpe del 15 de octubre por la fuerza actual o virtual de las armas: pudo desplazar a los hombres más capaces y progresistas de la primera Junta y del primer gobierno por la fuerza de las armas; pudo resistir contra el proyecto popular por la fuerza de las armas. Más aún, dada la tradición de la Fuerza Armada, cualquier solución política que no estimara conveniente para ella, sería rechazada. Así, por ejemplo, está rechazando actualmente la mediación, aunque no la esté rechazando, al menos de igual manera, el PDC, su consocio en el poder. No es difícil aventurar que si el PDC aceptase totalmente los riesgos políticos de una mediación, sería expulsado incluso del poder aparente que hoy sustenta. No hay apoliticidad en la Fuerza Armada sino clara toma de partido entre dos proyectos políticos en disputa. No vamos a discutir si esto es bueno o es malo, porque la discusión sería irrelevante para nuestro propósito; es un hecho y como tal hay que aceptarlo.

La propia presencia en el poder del PDC fue por invitación de la Fuerza Armada y seguirá en el poder sólo mientras sea necesaria su presencia, o porque los Estados Unidos y otros países así lo exijan, o por que así le parezca mejor para sus fines a la Fuerza Armada. El PDC nunca podrá

por su propio peso político hacer triunfar una solución política para el país ni con elecciones ni sin ellas.

Desde la perspectiva de la actual Junta y de la decisión de la actual Fuerza Armada carece, por tanto, de sentido real hablar de una solución puramente política. Pero algo semejante, aunque por razones distintas, ha de decirse desde la perspectiva del FDR-FMLN.

B. Una solución política por parte del FDR-FMLN, que fuese planteada al margen de su poder militar, no tiene visibilidad alguna. En las actuales circunstancias, terriblemente represivas, el proyecto popular sólo cuenta con dos apoyos actual y efectivamente eficaces: su propio poder militar con la base popular que lo sustenta y el apoyo de la solidaridad internacional. Pero ni siquiera esta solidaridad bastaría para poder defender en el interior del país el proyecto popular. Ni siquiera las movilizaciones masivas ni una poderosa organización popular no armada fueron capaces de llevar adelante el proyecto democrático-revolucionario. Por todo ello es utópico pedir que el FDR-FMLN abandone el último recurso de la fuerza, no ya para atacar y triunfar eventualmente, sino simplemente para no ser aplastados, como lo fue la dirigencia política del FDR, cuando desarmada y pacífica buscaba cómo propiciar una salida democrático-revolucionaria para el país.

Tampoco aquí importa para nuestro propósito discutir la legitimidad moral y política de la armamentización del proyecto popular. Nuestra revista ECA ya ha escrito frecuentemente sobre este punto y ha recogido documentación a este propósito (cfr. ECA, enero, 1981, pp. 87-88), así como Monseñor Romero en sus dos últimas Cartas Pastorales. Es un hecho que el FDR-FMLN no va a abandonar su poder militar ya conocido y contrastado, aunque tal vez pudiera regular su uso en caso de su proceso de mediación o cosa semejante.

Pero es que, aunque se impusiese políticamente, la solución corregida en lo que fuera necesario y pactado del FDR-FMLN, carecería de toda base de sustentación efectiva, si no contase con un poder militar capaz de garantizar esa solución. Es mucho pedirles que consideren como tal a la actual Fuerza Armada, que les tilda de comunistas, de terroristas, de enemigos de la patria y de la Constitución.

C. A veces se ha propuesto con ingenuidad política una solución que consistiese en unas ne-

gociaciones que llevarán a la alianza del FDR con el PDC. Es decir, una alianza de los sectores democráticos que dejara fuera al sector revolucionario-militar por un lado y al sector reaccionario-militar por otro. Tal propuesta deja de lado un hecho evidente: que la fuerza impositiva de la actual Junta está sólo en la Fuerza Armada y que la fuerza impositiva del FDR-FMLN está en el FMLN. Ciertamente el FDR pesa más en su alianza que el PDC en la suya, pero esto, que es garantía de una racionalización de los propósitos revolucionarios, no implica la posibilidad y la viabilidad de un gobierno, que, por lo menos, no contara con la anuencia del FMLN y que no respondiese sólidamente a las necesidades profundas, que han dado lugar al surgimiento del movimiento revolucionario salvadoreño.

Por dondequiera que se mire es utópica una solución puramente política que ninguna de las partes en litigio la acepta y para la que no se dan condiciones objetivas. La solución puramente política tiene menos posibilidades que la solución puramente militar y ya vimos que una solución puramente militar no es la salida que necesita El Salvador.

3.3. Es preciso trabajar en favor de una solución político-militar, por medio de la cual se dé paso y se garantice un proyecto político y una estructura de poder, que responda a las necesidades objetivas de la realidad nacional, a las exigencias justas del pueblo organizado y a la actual correlación de fuerzas dentro y fuera del país.

La propuesta de una solución político-militar, cuyo sentido y concreción determinaremos a lo largo de este párrafo, no es resultado residual de una operación lógica, que ha descartado ya la solución puramente política y la solución puramente militar, sino que parece ser la solución exigida por el conjunto de hechos fundamentales, que analizamos en la segunda parte de este trabajo. Los hechos mismos empujan a una solución político-militar, por más que ideal e ilusoriamente algunos justificarían como mejor la solución militar y otros tal vez una solución puramente política.

A. La solución político-militar es una solución unitaria, en que ambos factores se potencian a la vez que se limitan y en la que sus respectivos pesos específicos pueden variar tácticamente según la correlación de fuerza, pero cuya dirección

fundamental descansa últimamente en la dimensión política.

Debe concebirse efectivamente como una solución unitaria, esto es, no como una solución en que corran paralelas las acciones políticas y las acciones militares, sino como una solución en que ambos factores se potencien entre sí, de suerte que el planteamiento militar tenga más fuerza y más eficacia práctica porque está respaldado por todo un planteamiento político-social y éste, a su vez, se vea reforzado y respaldado por un poder militar. Pero por lo mismo esta potenciación en razón del carácter unitario y no meramente añadido de la solución limita los excesos o las debilidades de ambos componentes: el factor político delimita la calidad y la cantidad del esfuerzo militar, de suerte que éste no cobre una autonomía absoluta, mientras que el factor militar delimita las posibles fáciles concesiones del factor político. Según las circunstancias, puede coyunturalmente intervenir y pesar más en el proceso uno que otro: puede haber momentos en que las acciones militares, no la potencialidad militar, puedan disminuir en razón de una mediación o de algunas condiciones pactadas, pero puede haber momentos en que incluso las acciones deban incrementarse para apoyar una más pronta y justa solución parcial o total del conflicto. Pero, aunque esto pueda ocurrir así coyunturalmente, el principio directivo del proceso no puede ser la fuerza militar que se tiene sino la justicia de la causa que se defiende y la justeza de los medios que se proponen; esto es, el principio últimamente determinante puede y debe ser el del razonamiento político y el del consenso político a ser posible de la mayor parte de la población.

Desde este punto de vista, la solución político-militar debe tener, ante todo, en cuenta las necesidades objetivas de la realidad nacional y las exigencias justas del pueblo organizado. Las necesidades objetivas orientan la solución hacia respuestas aceptables a la mayoría del pueblo, sea cual fuere su posición social, mientras que las exigencias justas del pueblo organizado indican los mínimos que deben alcanzarse para que no queden defraudados, quienes con tantos sacrificios y con tantas muertes han impulsado un proceso de profunda renovación nacional. De poco sirve acusarles de que su inspiración es marxista y su propósito final el comunismo. Ambos aspectos de la afirmación son inexactos, por no decir falsos. Así y todo no puede negarse que ha sido el pueblo organizado el principal actor de un proce-



so, en el que fundamentalmente estaba pidiendo que se le dejara vivir como corresponde a hombres que trabajan y a personas humanas. De ahí que la satisfacción de sus justas exigencias sea una condición ineludible, no sólo para calmar sus aspiraciones y dar respuesta a sus derechos, sino también para acertar objetivamente con la respuesta más ajustada y más adecuada.

La solución político-militar necesita también tener en cuenta la actual correlación de fuerzas tanto dentro como fuera del país. En El Salvador por su situación económica que obliga a respuestas bien definidas y a dependencias bien precisas; por su situación geopolítica que obliga a concesiones y comportamientos tal vez poco idealistas; por su tradición que afecta a creencias, actitudes y emociones que no pueden cambiarse en un día; por todo eso y mucho más, no es posible hacer cualquier cosa y de cualquier modo. No se puede ser voluntarista, aunque la acción debe ir dirigida por el principio un tanto utópico de que lo más justo acabará siendo lo más conveniente.

Sin embargo, esta solución político-militar no puede desconocer el hecho de que por parte y parte se da una poderosa fuerza militar, cuyo prolongado enfrentamiento llevará sin duda al país a un desastre de incalculables e irreparables consecuencias, al menos a corto plazo. Este hecho del poderío militar debe ser aceptado por ambas partes. No puede pedirse a la izquierda

que deponga las armas para empezar a entablar un diálogo; la razón de la izquierda sin armas es una razón sin peso. No puede continuarse una lucha indefinidamente y sin calcular las consecuencias. Ambas partes, si ponen delante el bien permanente del pueblo salvadoreño, están obligadas a preguntarse seriamente si no pueden acortarse los días de desolación y muerte o, al menos, si no puede limitarse al campo de los dos ejércitos al derramamiento de sangre.

Es un hecho que se está dando una guerra civil total, aunque los enfrentamientos estrictamente militares sean más reducidos. No es una guerra convencional, pero sí es una guerra real. De poco sirve insistir en que la otra parte no tiene derecho al uso de las armas. El gobierno va a insistir en que es el actual representante del Estado y que, por consiguiente, tiene derecho y está obligado a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder; la oposición dirá que le han cerrado todo camino pacífico y que ha recibido un mandato del pueblo para que defienda con las armas unos derechos y unas vidas que están siendo aplastados por las armas. Las circunstancias históricas de El Salvador han hecho inevitable el enfrentamiento militar. Lo que ahora queda por hacer es reducirlo a límites y formas racionales, conforme a las leyes de la guerra universalmente reconocidas. Este hecho de la guerra civil debe ser reconocido como tal por la comunidad internacional, al menos de hecho. Factores políticos deben tam-

bién aquí moderar los factores estrictamente militares. Y desde luego no puede ser el poder que dice representar la legalidad y la racionalidad del Estado el que use y abuse de su fuerza para irrespeter las exigencias objetivas y legales, sin las que un gobierno pierde toda razón de ser aun como gobierno de hecho.

B. La solución político-militar puesta en marcha por la Junta cívico-militar ha resultado del todo insuficiente. Como es sabido, esta solución consiste en ofrecer al pueblo un conjunto de reformas profundas —factor político— y, al mismo tiempo, desatar una fortísima campaña de represión y de ataques por parte del ejército —factor militar—; al mismo tiempo este esquema de solución político-militar ha sido llevado a cabo por una Junta compuesta por el PDC —factor político— y por la Fuerza Armada —factor militar—. El resultado ha sido un fracaso total tanto para detener el avance de las fuerzas revolucionarias como para asegurar un desarrollo estable a El Salvador. En esto coinciden la oligarquía, el PCN, la empresa privada, los observadores internacionales y, desde luego, la oposición. Las causas del fracaso son claras. En el aspecto de las acciones emprendidas es evidente que en el esquema reformas con represión, la represión ha tenido mucha mayor importancia y mucho mayor impacto en la conciencia nacional que las reformas; esto es, lo militar ha predominado sobre lo político. En el aspecto de la estructura del poder ocurre lo mismo: los representantes de la Fuerza Armada tienen un peso mucho mayor que los representantes del PDC en la conducción global del proceso; esto es, lo militar ha predominado sobre lo político.

Conscientes del fracaso de este tipo de solución político-militar se propone hoy otro tipo de solución, se propone una solución aparentemente política: las elecciones para marzo de 1982. Pero las elecciones no dejan de ser en el caso concreto de El Salvador una solución político-militar, en que de nuevo predomina el factor militar, repitiéndose así el mismo esquema, cuyo fracaso es cada día más evidente. Efectivamente la solución política se deja para más tarde, mientras que de momento se profundiza en la solución militar por la vía de la represión y por la vía del acrecentamiento de las acciones militares. Por otro lado, aunque las elecciones fueran políticamente posibles, que no lo pueden ser de acá a diez meses, sería también una solución en que lo militar predominara sobre lo político: no se van a

permitir más partidos y más personalidades que las que gusten a la Fuerza Armada —recuérdese que ésta ya ha hecho público un comunicado (La Prensa Gráfica, 30 de marzo, 1981), en el que tilda de terroristas y servidores del comunismo internacional a la dirigencia del MNR y del MPSC, así como a un buen número de intelectuales, religiosos, militares, sindicalistas, etc. Y aun en cualquier caso, no se respetará el resultado de las urnas; bastará con tildar a los triunfadores de comunistas por más moderados que sean, como en el reciente caso de Bolivia, para que el poder militar vuelva a hacerse cargo del poder político. De hecho uno puede preguntarse qué hicieron o dejaron de hacer los actuales jefes militares en las elecciones de 1972 y en las más recientes de 1977.

Por lo demás es evidente que a corto plazo no hay espacio político para unas elecciones libres, cuando está en ruinas la vida social y política de El Salvador y seguirá estando en los meses próximos. Pero es que, además, no se puede esperar a unas elecciones para resolver el problema urgente y angustioso de El Salvador; no se puede esperar hasta marzo de 1982 para empezar a detener el proceso de destrucción que asola El Salvador, sino que hay que empezar a resolverlo inmediatamente. Finalmente no se puede esperar de unas elecciones la solución de ese problema, porque ni la Fuerza Armada ni el FDR-FMLN, principales protagonistas del conflicto, se van a considerar obligados por unos resultados que saben de antemano que no pueden ser justos, que no pueden ser democráticos. Y es que fuera de un ambiente propicio, que permitiera la acción de los partidos políticos —¿hasta cuándo se va prolongar el Estado de Sitio y el Toque de Queda?, el uso racional de los medios de comunicación, etc.—, se requiere la creación y consistencia de un poder judicial nuevo y la reestructuración del poder militar, lo cual no se puede lograr antes de las elecciones ni después de ellas por las vías seguidas hasta ahora.

¿Qué solución político-militar queda entonces?

Para responder a esta pregunta hay que distinguir claramente los fines de los medios. La mediación y, consiguientemente, la negociación, si fueran posibles, son medios para una solución político-militar, pero no son el fin en sí mismas. La solución político-militar supone a corto y mediano plazo, como finalidad, el trabajo de hacer crecer los aspectos políticos y sociales, aunque sin descuidar el fortalecimiento y consolidación

de los militares. En el exterior, esto supone el buscar y hallar una presión diplomática internacional cada vez más fuerte en favor de una solución definitiva y justa para el pueblo salvadoreño; los pueblos y los gobiernos del mundo deben conocer la dramática situación de El Salvador y deben presionar a los dirigentes de nuestro país así como a los dirigentes del gobierno de los Estados Unidos para que acepten pronto una salida al conflicto. En el interior, esto supone que entren en juego, la mayor parte de las fuerzas sociales no militarizadas para que asimismo fueren a buscar la salida de esta situación intolerable: el gobierno y la Fuerza Armada deben permitir que se hagan sentir en la arena política del país la mayor cantidad de fuerzas sociales, deben fomentarlas y no acallarlas con el Estado de Sitio, con el Toque de Queda, con las denuncias institucionales, con la represión y el amedrentamiento sistemático.

Dentro de este marco general de la solución político-militar no puede desecharse con facilidad el medio —que no fin— de la negociación, de la mediación o de algún otro semejante.

Las razones dadas por la Fuerza Armada y, a su zaga, por el PDC para no aceptar la mediación no son válidas. La presentación de un documento ya obsoleto, atribuido a la Comisión Política Diplomática del FDR-FMLN, en que se atribuye a la mediación un carácter de maniobra táctica, no es razón válida, una vez que la Internacional Socialista y algunos países irrefutablemente democráticos y pro-occidentales se han ofrecido como garantes de ella.

Tampoco son válidas las razones que, en nombre de la Fuerza Armada, expuso el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada de El Salvador, Coronel e Ingeniero Jaime Abdul Gutiérrez. Sus argumentos en efecto se reducen a los siguientes: a) "es el pueblo salvadoreño el único que tiene derecho a decidir su destino, sin presiones internas y mucho menos externas, sin violencia y en absoluta libertad"; b) acceder a la mediación "significaría prestarse a una maniobra del comunismo internacional que pretende engañar a la opinión pública mundial, tratando de involucrar en el problema a diversos gobiernos como una forma de ganar tiempo para los objetivos de la guerra en favor de los enemigos del pueblo"; c) "hemos dicho ¡no! a la intervención extranjera, y esa seguirá siendo nuestra posición ineludible"; d) en El Salvador, nadie,

absolutamente nadie, puede arrogarse el derecho de realizar ningún tipo de arreglo a espaldas del pueblo. Y cuando digo nadie, por supuesto, nos incluye también a los gobernantes". A esas razones pueden contraponerse respectivamente las siguientes: a) una mediación internacional justa es un procedimiento jurídico reconocido universalmente como válido, al que no puede tildársele el carácter de presión ilegítima, de violencia o de falta de libertad; y esa mediación internacional justa podría determinar cuáles son los canales y modos más eficaces en la actual coyuntura para que el pueblo salvadoreño decida su destino; b) es erróneo en sí mismo e injusto con las instituciones, naciones y personalidades que se inclinan por la mediación el atribuirles ignorancia o malicia al prestarse a un juego del comunismo internacional; c) en El Salvador se está dando de hecho una masiva intervención extranjera requerida por la actual Junta y esta intervención lesiva para el pueblo y lesiva para la Fuerza Armada es la intervención de los Estados Unidos, condenada, entre otros, por personalidades como las de Monseñor Romero y Monseñor Rivera y Damas; d) el modo como se tuvo en cuenta al pueblo en el levantamiento del 15 de octubre no fue precisamente el modo de las elecciones; ni los arreglos con la Democracia Cristiana por parte de la Fuerza Armada fueron hechos de cara al pueblo.

Lo que se teme es que la mediación favorezca al FDR-FMLN y desfavorezca al PDC-FA. Pero que este favorecimiento o desfavorecimiento sea injusto puede evitarse perfectamente, si los integrantes de la mediación son reconocidos como justos por la comunidad internacional. Como quiera que sea debe quedar bien claro quiénes quieren la mediación y quiénes no, por qué unos la quieren y por qué otros no. La mediación podría fracasar, porque las partes en litigio podrían dificultarla. Pero entonces serían unos mediadores imparciales, los que dictaminaran quiénes se oponen a una salida justa y razonable para el atroz conflicto de El Salvador.

No puede negarse que la aceptación inicial de un proceso de mediación por parte del FDR-FMLN supone un gran avance político, que va a robustecer su credibilidad tanto al interior como al exterior del país. Esa aceptación no implica el disimulo y, menos aún, el abandono de los justos propósitos revolucionarios ni, menos, forma alguna de entreguismo o de desánimo en la lucha; implica, más bien, la convicción de la justicia de

su causa y la confianza en sus propias fuerzas tanto en lo militar, como en lo social, como en lo internacional; implica la persuasión de lo justo de su causa, al querer plantearla ante mediadores justos y solventes. Caso de que no aceptaran los resultados de la mediación, se tendría motivo para incriminarlos. Son los que de entrada no aceptan una mediación, vista como muy razonable por una gran parte de la comunidad internacional, los que quedan desairados, los que aparecen como prepotentes o como obsecados. El pueblo salvadoreño y los pueblos y gobiernos del mundo deben saber por qué unos aceptan la mediación y otros no, quiénes la favorecen y quiénes están contra ella. La escapatoria de las elecciones no es salida política y democrática, más que si es aceptada como tal por un jurado internacional, que llegue a conocer de verdad si es posible hablar de elecciones libres hoy en El Salvador y si las elecciones pueden traer la paz, la justicia y la libertad al pueblo salvadoreño. Las elecciones pueden ser un medio ideal de solución, pero hay que preguntarse si son, a corto plazo, un medio real, que se ajuste a las necesidades y a las posibilidades del pueblo salvadoreño en la situación actual.

C. La solución político-militar implica algún modo de salida negociada al conflicto. Aunque no es político-militar porque sea negociada, sino porque, como solución, deja de reducirse a factores militares para extenderse a toda una gama de factores políticos, tiene en su ejecución última un cierto carácter de negociación. No se cifra todo en la derrota militar del adversario hasta su exterminio sino se procura acortar el tiempo y la forma de la guerra, mediante negociaciones que apresuren lo que de todos modos va a ocurrir. ¿Por qué no lograr para hoy lo que con mucho mayores costos va a suceder mañana? ¿Por qué entrar a las últimas consecuencias de un genocidio, si caben soluciones mucho menos violentas?

Parecería que Estados Unidos, la Fuerza Armada y la Junta cívico-militar no empezarian a considerar seriamente una salida negociada hasta que probaran el éxito o fracaso de sus nuevas inversiones militares, que no estarían a pleno rendimiento hasta pasada la mitad de este año. Tal vez en contrapartida ofrecerían una disminución en la barbarie represiva, especialmente de sectores cualificados e incluso ciertas correcciones en los mandos de los cuerpos de seguridad. Parece improbable que antes de esas fechas y, en cualquier hipótesis, antes de haber hecho el máximo daño posible al ejército popular y a su base de

sustentamiento popular, Estados Unidos obligue a aceptar algún modo público de mediación. Triste e injusta perspectiva, pero probablemente la más realista.

Es indudable, sin embargo, que la presión de la situación, la presión de fuerzas internacionales y la presión de las lúgubres perspectivas económicas, debiliten, antes del mes de agosto, el aparentemente sólido rechazo de la mediación que hoy se da oficialmente. Los empresarios sentirán cada vez más fuertemente el impacto del desastre económico, que podría empezar a paliarse en cuanto se diera una solución negociada; los militares empezarán a dudar de una guerra que ellos solos no pueden conducir a la victoria y que los adversarios ofrecen ser acortada por el camino de la negociación, garantizada por países, instituciones o personalidades democráticas; las capas medias y populares se preguntarán por qué no acabar ya lo que tendrá que acabar un día; los intelectuales y políticos empezarán a cuestionar la intransigencia de unos hombres que están radicalizando el país y que no han podido en casi dos años dar ningún firme signo de esperanza; la Iglesia debería aprestarse a ofrecer sus buenos oficios para que las partes negocien. El propio Partido Demócrata Cristiano podrá llegar a ver que su misión ha terminado, si no puede hacer que el factor político de la negociación prepondere sobre el factor militar de la represión y de la guerra.

Pero aunque una mediación formalmente tal no es probable que sea aceptada pronto, una negociación tácita podría conseguir algunos resultados importantes. La Fuerza Armada se encuentra en el poder y probablemente no ve que el poder militar adversario le pueda derrocar pronto; pero sí ve que no puede gobernar y que no puede dar salida real a los problemas del país. Puede ver también que algunas acciones nuevas podrían hacerle más fácil una salida menos desairada del conflicto.

La Fuerza Armada de El Salvador debería exigir el cese de la ayuda militar norteamericana. Ya tiene los dineros del Estado para comprar el armamento requerido; ya tiene sus propios mandos y su propia Escuela Militar para formar a sus miembros y para conducir una guerra contra compatriotas que han tenido que formarse militarmente en circunstancias tan poco profesionales. Por patriotismo y por orgullo profesional debería decir un no rotundo al intervencionismo militar norteamericano. Lo mismo debería exigir



el Partido Demócrata Cristiano que durante tantos años ha acusado a Estados Unidos de intervenir en la política salvadoreña dando todo tipo de ayuda a gobiernos oficialistas. Y sin esa ayuda no pueden triunfar, que reconozcan pronto la realidad de los hechos y busquen una digna solución negociada.

La Fuerza Armada y la Junta cívico-militar deben comprometerse, en segundo lugar, al cese absoluto de la represión, entendiendo por tal toda acción violenta contra la vida humana, que no sea estrictamente militar, así como toda detención ilegal y toda forma de tortura. Nada de esto le ha dado resultado; al contrario, le ha causado gravísimos daños a su prestigio y a su futuro. Por razones de violación de los derechos humanos, la Juventud Militar se consideró obligada a levantarse el 15 de octubre. Estaban cansados de que los males del país y, especialmente la represión, cayeran sobre las espaldas y la responsabilidad de la institución armada.

La Fuerza Armada y la Junta cívico-militar deben comprometerse a crear cuanto antes un espacio político democrático, donde se pudiera ejercer con seguridad una actividad política no violenta, que permitiera desde la movilización de masas y la huelga política a la libre expresión y utilización de los medios de comunicación masivos.

La Fuerza Armada y la Junta cívico-militar

deberían reconocer de hecho que tanto la oposición política y la oposición militar han logrado una legitimidad de hecho tal, que amerita que, al menos en la práctica, sean considerados como beligerantes y tratados en consecuencia.

Estos tipos de acción situarían a la Fuerza Armada y a la Junta en mejores condiciones a la hora de una oferta internacional de mediación. Una puesta en práctica de las mismas podría conseguir que la oposición hiciera por su parte concesiones similares: cese del intervencionismo extranjero propiamente tal, cese de acciones que pudieran considerarse represivas y no estrictamente militares, reconocimiento y respeto de espacios políticos y democráticos, reconocimiento de sus adversarios como enemigos de guerra.

El mero enunciado de estos propósitos indica lo complejo y lo arduo de una solución político-militar. No pretendemos entrar en detalles, porque no era ese el propósito de estas líneas, sino tan sólo aclarar la lógica de una solución político-militar y proponer algunas características de la misma. No mucho más le está permitido y le está exigido a la labor universitaria. Y no hemos pretendido sino cumplir con una labor universitaria, que tiene obligadamente que esforzarse en profundizar teóricamente sobre la realidad nacional y sobre sus distintas coyunturas. No hemos pretendido imponer ideas ni menos soluciones concretas. Hemos pretendido tan sólo



aclarar un ingente problema teórico y práctico presentando unos hechos fundamentales en busca de la realidad de los hechos, para que de esa misma realidad surja lo que pudiera ser principio de solución para el pueblo de El Salvador. Si estas líneas contribuyen a una discusión honesta y

respetuosa en busca de soluciones prácticas acertadas, justas y ajustadas a la realidad, habrán cumplido con su propósito estrictamente universitario.

11 de mayo de 1981.

